



1891-2022

Historia del Banco de la Nación Argentina y su papel en la promoción del desarrollo

Andrés Regalsky y Marcelo Rougier (Coords.)



Banco de la
Nación Argentina

1891-2022

Historia del Banco de la Nación Argentina y su papel en la promoción del desarrollo

› Andrés Regalsky y Marcelo Rougier (Coords.)

Índice

Autoridades del Banco de la Nación Argentina	4
Presentación Silvina A. Batakis	5
Prólogo Carlos Marichal	6
Introducción Andrés Regalsky y Marcelo Rougier	13
Capítulo 1 Los comienzos del Banco de la Nación Argentina: crisis y resurrección de la banca pública (1891-1914) Daniel Moyano	17
Capítulo 2 El Banco Nación en tiempos tormentosos, de la Primera Guerra Mundial a la Gran Depresión (1914-1935) Andrés Regalsky	47
Capítulo 3 El Banco de la Nación Argentina en el nuevo sistema financiero (1935-1946) Noemí M. Girbal-Blacha	88
Capítulo 4 El Banco de la Nación Argentina durante el peronismo (1946-1955) Marcelo Rougier	125
Capítulo 5 El Banco de la Nación Argentina durante la última fase de la industrialización (1955-1976) Juan Odisio	170
Capítulo 6 El Banco de la Nación Argentina: de la liberalización a la crisis del sistema financiero (1976-1991) Diego Rozengardt y Lucas Porcelli	215
Capítulo 7 El Banco de la Nación Argentina durante la convertibilidad y su crisis (1991-2001) Noemí Brenta	250
Capítulo 8 El Banco de la Nación Argentina en la posconvertibilidad (2002-2021) Andrea Molinari y Cintia Gasparini (con la colaboración de Pablo Mareso)	281
Autores	322
Fotografías del Banco de la Nación Argentina en guarda del Archivo General de la Nación	325

Autoridades del Banco de la Nación Argentina

PRESIDENTA

Lic. Silvina Aída Batakis

VICEPRESIDENTE

Carlos Alberto Caserio

VICEPRESIDENTE 2°

Dr. José Miguel Ballesteros

DIRECTORES

Lic. Martín Miguel Di Bella

Lic. Cecilia Carmen Fernández Bugna

Lic. Martín Miguel Ferré

Dr. Raúl Alberto Garré

Ángel Francisco Mercado

Lic. Martín Alberto Pollera

Dra. Julia Strada

SÍNDICO

Cr. Marcelo Costa

Capítulo 5

El Banco de la Nación Argentina durante la última fase de la industrialización (1955-1976)

> Juan Odisio

Introducción: coyuntura y estructura

En septiembre de 1955 una alianza cívico-militar derrocó a Juan Perón de la presidencia nacional. El nuevo gobierno convocó a Raúl Prebisch -entonces secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- para realizar un programa tendiente a resolver los problemas económicos.¹ Los documentos que entregó Prebisch fueron adoptados como lineamientos de política económica por la autodenominada “Revolución Libertadora” en abril de 1956, aunque tuvieron una polémica recepción en el medio intelectual y político de la época.²

El informe destilaba un fuerte anti-peronismo y lanzaba un diagnóstico muy crítico respecto a la política económica de los diez años anteriores, pero también vertía consideraciones de aliento sobre la necesidad de profundizar la industrialización. Señalaba que no se podían satisfacer las demandas del consumo popular por la imposibilidad de incrementar las importaciones ante la escasez de divisas. La crisis energética y la descapitalización de la infraestructura de transportes imponían también límites en ese sentido. A su juicio, la intervención estatal había tomado demasiada influencia en las inversiones de capital y no las había orientado de la manera más conveniente para acelerar el desarrollo o atenuar la vulnerabilidad externa (Prebisch, 1956).

El “Plan” proponía eliminar la “excesiva” intervención estatal e introducir una mayor “racionalidad” en el manejo de los asuntos económicos. Las recomendaciones abarcaban el incentivo de la producción agropecuaria con la devaluación del tipo de cambio y el favorecimiento de su tecnificación, la promoción de nuevas exportaciones, la liberalización del mercado de cambios y la necesidad de acudir al crédito externo, el estímulo de la producción petrolera, el aliento de la productividad en general (eliminando aumentos indiscriminados de salarios), la búsqueda de sustentar la inversión en el ahorro más que en la emisión monetaria, entre otras. En rigor, muchas de estas ideas Prebisch las había esbozado, al menos, desde 1944 (Dosman, 2008).

La estabilización de corto plazo debía adoptar un esquema de precios relativos más favorable a los productores agropecuarios, que además de impulsar las exportaciones, permitiera restablecer el crédito de largo plazo y fomentar la inversión privada. Para atacar la inflación se requería frenar el ritmo de creación monetaria y dejar de lado las políticas de controles de precios y cambios, aunque no bajo una política de shock sino de “continencia”. A las divisas obtenidas por ventas externas proponía sumar la obtención de créditos externos para profundizar

¹ El llamado “Plan Prebisch” se conformó por tres documentos presentados entre octubre de 1955 y enero del siguiente año. Puede consultarse la trayectoria de Prebisch en Odisio (2022).

² Sobre las discusiones desatadas a raíz del Plan, véase el capítulo 4 de Rougier y Odisio (2017).

la sustitución de importaciones, a la par de una política selectiva de orientación de la inversión extranjera. La Argentina debía abandonar su aversión nacionalista y considerar los beneficios potenciales de ingresar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El programa presentó una combinación de posiciones ortodoxas con otras desarrollistas. Si bien sostenía que las políticas de liberalización eran indispensables para equilibrar la macroeconomía y abatir la inflación –la meta más urgente en lo inmediato–, a largo plazo era necesario incrementar la producción petrolera, fortalecer la sustitución de importaciones, promocionar obras de infraestructura básica, mejorar la productividad de la economía, avanzar con las industrias básicas a gran escala e iniciar la exportación de manufacturas. Para Prebisch el objetivo del desarrollo pasaba por solucionar la restricción externa mediante una mayor industrialización.

En el plano internacional, el período que fue desde 1945 hasta 1970 vio transitar a las principales potencias por un sendero de crecimiento económico acelerado, conocido como la “Edad de oro” del capitalismo moderno. El acervo tecnológico extendió la lógica del capital industrial a todos los sectores productivos, con la difusión de las técnicas de “organización científica del trabajo”, el “fordismo” y la modernización de los sistemas de gestión. En el agro, la mecanización produjo un formidable aumento de la productividad, promoviendo el desplazamiento de mano de obra hacia las ciudades. La ampliación de los servicios respondió asimismo al crecimiento industrial y a la diferenciación del capital. Las nuevas tecnologías de productos y procesos instalaron el predominio de las industrias de bienes de consumo durable y de bienes intermedios.

Alzas salariales periódicas alimentaron la demanda y cerraban un círculo virtuoso de crecimiento centrado en los mercados nacionales. Esto fue acompañado por el despliegue del Estado de Bienestar, sobre todo en Europa, que llegó a proveer cobertura prácticamente universal en las prestaciones básicas. En el proceso de incrementos sucesivos de inversiones, productividad e ingresos cumplió un papel central el sector productor de bienes de capital, al incorporar, multiplicar y difundir el progreso técnico. Las empresas transnacionales crecieron aceleradamente en la posguerra y fueron las protagonistas del nuevo patrón tecnológico, como de su posterior transformación. Estas firmas consolidaron un patrón de intercambio horizontal (manufacturas por manufacturas), que reemplazó al de intercambio vertical (materias primas por productos industriales). Esto concentró los flujos del comercio mundial en la tríada Estados Unidos-Europa-Japón y limitó las posibilidades de expansión y el perfil comercial de los países subdesarrollados.

Además de buscar una inserción directa en mercados protegidos, la inversión extranjera se orientó hacia la periferia para incorporar fuerza de trabajo a menor costo. Gracias al salto tecnológico producido por la progresiva industrialización, varias naciones latinoamericanas mejoraron su performance económica: dentro de las más grandes, Brasil y México aceleraron su tasa de crecimiento y rebasaron el tamaño de la economía argentina, que por décadas había sido la principal potencia del continente (Bértola y Ocampo, 2013). Esto generaba reuelos geopolíticos y una mirada pesimista entre los economistas y funcionarios respecto al rumbo seguido por nuestro país (Rougier y Odisio, 2017).

Las condiciones de crecimiento de la economía nacional quedaron determinadas por la dinámica cíclica del modelo industrializador. La etapa “compleja” o “difícil” de la sustitución de importaciones estuvo propulsada por el dinamismo de las industrias “básicas”, a partir de la “apuesta eufórica al capital extranjero” definida a partir de 1953 (Schvarzer, 1996). Antes, la sustitución de importaciones había permitido enfrentar la declinante capacidad de pagos externos; pero, una vez que se logró producir una variada gama de bienes finales, el crecimiento quedó vinculado al abastecimiento externo de combustibles, insumos y maquinarias. La situación dio

lugar a desequilibrios crónicos y recurrentes del balance de pagos cada vez que la expansión interna presionaba sobre las importaciones; de allí el conocido ciclo de stop and go (Fiszbein, 2015). Las alternativas para superar el dilema eran acotadas y todas las respuestas fueron, de algún modo, ensayadas por los gobiernos que transcurrieron entre la segunda presidencia de Perón y el golpe cívico-militar de 1976.

El impulso industrial quedó subordinado a las disponibilidades de divisas obtenidas mediante las exportaciones tradicionales (de bienes-salario), que estaban estancadas o incluso mermaban en épocas de crecimiento por el incremento del consumo interno. Antecedidas por aumentos de las importaciones y el desplome de las reservas, se manifestaron repetidos escenarios de crisis de balance de pagos. No obstante, a partir de mediados de los sesenta la economía argentina consiguió dar parcial resolución al estrangulamiento externo. En la década posterior a 1964, la tasa de crecimiento fue superior al 4% anual en promedio; un incremento significativo, aunque continuó signado por una fuerte inestabilidad. Las alternativas para la resolución definitiva de la restricción externa fueron la guía para las estrategias económicas de la etapa, aunque limitadas por la dinámica política, que condicionó las posibilidades de implementación y éxito de las definiciones de largo aliento.

Aún con la revitalización rural de esos años -que permitió elevar el ritmo de crecimiento e incrementar la disponibilidad de divisas-, las manufacturas fueron el sector más dinámico de la economía nacional y la principal fuente de empleo y riqueza. Por un lado, continuó el declive relativo de las ramas “tradicionales” -como la industria alimenticia y la textil, sectores insignia de la primera fase de la industrialización- mientras las ramas “modernas” ganaron participación, llegando a generar casi el 60% del valor bruto de la producción industrial en 1975. Mientras que la producción rural de ese año fue un 80% más elevada que la de 1950 en términos constantes, la industria manufacturera había triplicado su valor agregado (Odisio y Rougier, 2021).

La “industrialización dirigida por el Estado” redefinió el papel y las herramientas que tendría bajo su arbitrio el Banco de la Nación Argentina (BNA).

La reforma (financiera) de la “revolución”

Ciertamente, las propuestas financieras del “Plan Prebisch” fueron acometidas con mayor resolución que los planteos desarrollistas. En líneas generales, la política económica del gobierno militar propendió a la liberalización de los mercados financieros y de capitales. En esa tónica, se refinanció la deuda externa con once naciones acreedoras en mayo de 1956, asociación que dio nacimiento al Club de París. En septiembre, la Argentina ingresó al FMI y al BIRF. En abril del siguiente año el Fondo otorgó su primer crédito al país por 75 millones de dólares. A pesar de los esfuerzos, el crecimiento de los precios fue mayor al previsto por el gobierno y a partir de 1957 la política económica viró hacia un mayor pragmatismo.

El nuevo Directorio del BNA reprodujo la mirada sombría de Prebisch. Se acusaba, por ejemplo, que el régimen peronista “perdió la oportunidad de integrar nuevamente al país dentro del concierto mundial, sin desviarlo de su nueva orientación que lo llevaba a desarrollarse industrialmente. Actuó como si la guerra no hubiera terminado, y la consiguiente falta de colaboración exterior perjudicó seriamente al país, que no podía por sí mismo crear todos los recursos que necesitaba. Para suplirlos y satisfacer el afán de realizaciones se recurrió a un viejo procedimiento: la inflación en gran escala”. Y luego se detallaban los problemas más graves heredados: “una gran tensión social, y el hecho incontrovertible que diez años de demagogia y mala dirección nos había dejado más pobres que antes y con nuestro utilaje industrial y de servicios públicos seriamente desgastado” (Memoria 1955-1956-1957: 15 y 17).

Mientras se preparaban las nuevas directrices para el sistema bancario, se mantuvieron los mecanismos de regulación de los depósitos nacionalizados. El BCRA procuró que el redescuento se ajustara a las demandas “imprescindibles” de crédito, para “moderar la creación de medios de pago y frenar la inflación”, pero sin “constituir un obstáculo a la expansión natural de las actividades de desatender los requerimientos normales de crédito”; se pretendía alcanzar un difícil “doble equilibrio” de “desarrollo armónico de la agricultura y la industria y política antiinflacionaria sin depresión” (BCRA, 1956: 14). Con todo, los reajustes cambiarios de 1955 y los posteriores aumentos salariales presionaron sobre los costos de las empresas, que intensificaron su demanda de préstamos. A pesar del discurso favorable a la astringencia monetaria, el Banco Central adoptó una política crediticia relativamente laxa.

El “Plan” invocaba la necesidad de desbrozar el esquema heredado de regulación bancaria. Había que derogar el régimen de depósitos nacionalizados y sanear las finanzas de los bancos oficiales –comprometidas por préstamos no recuperados frente a otras reparticiones estatales, especialmente el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI)–. La enmienda de la posición patrimonial de los bancos oficiales debía conjugar la liquidación de los quebrantos que soportaban en cartera por créditos impagos con la consolidación de las deudas privadas de corto plazo. Era además imperioso restablecer la autonomía técnica y administrativa del BCRA, aunque no se debía regresar a un esquema mixto como en 1935, sino que debía permanecer en manos públicas. Se debía devolver lo antes posible a cada institución los depósitos y dejarlas en libertad para decidir el rumbo de sus operaciones, aunque siempre de acuerdo con la orientación fijada por el gobierno y el Banco Central.

El Directorio del Banco Nación explicitaba las motivaciones de la reforma financiera considerando dos aspectos fundamentales: “El primero consiste en la devolución de los depósitos a los bancos. Hay en ello una razón de orden secundario, a saber, eliminar la posibilidad de que se puedan aplicar represalias políticas mediante el control individual de los créditos, como ha ocurrido en el pasado. Pero la razón principal es restablecer la responsabilidad de los bancos en la función crediticia, manteniendo una relación entre préstamos y depósitos que sirva de freno a la expansión inflacionista” (Memoria 1955-1956-1957: 23). Para controlar las presiones inflacionarias, la intervención del BCRA sobre el volumen de crédito se debía realizar mediante el redescuento. En el mismo sentido se establecía una estricta separación entre préstamos según su plazo. La justificación era que las inversiones de mayor plazo (los de la industria y la construcción) se debían financiar con ahorro “genuino” y no mediante la “mera creación de créditos”, una medida considerada inflacionista. Por ello, el Banco Industrial de la República Argentina (BIRA) debía transformarse en un banco de desarrollo y especializarse en proveer ese crédito de largo plazo.

El gobierno avanzó con la preparación de una nueva Ley de Bancos con especial atención a tres temas: la modificación de las Cartas Orgánicas de los bancos oficiales (BCRA, Banco Hipotecario Nacional: BHN, BIRA y BNA), el régimen que se adoptaría para la devolución de los depósitos bancarios y el mecanismo para mejorar la posición patrimonial de las instituciones públicas. El 29 de octubre de 1957 se promulgó el reordenamiento, en línea con las propuestas de Prebisch. El decreto de normalización restituyó los fondos a los bancos, que a partir del primero de diciembre pasaron a ser manejados por su propia cuenta; se criticaba que el régimen anterior no había incentivado la atracción de depósitos ni se resarcían adecuadamente los gastos de captación.

Sin embargo, la reforma mantuvo en vigencia la Circular B.8 de 1951 del Banco Central respecto a los objetos del crédito. Allí se prescribían restricciones para una serie de destinos, vinculados a préstamos hipotecarios y de consumo, entre otros. La normativa establecía que los recursos bancarios debían consignarse a cuatro grandes finalidades (citadas en Noya, 1970: 162-163):

- a) La producción de bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población.
- b) Facilitar e intensificar la producción agropecuaria y la producción industrial de artículos no prescindibles ni suntuarios.
- c) La distribución de bienes, o sea la actividad comercial complementaria del proceso de producción.
- d) Posibilitar el incremento de servicios útiles y necesarios.

El sistema nacionalizado tenía un exceso de casi 50 mil millones de pesos en las acreencias de los bancos. Para las instituciones con depósitos por debajo de sus préstamos (como el BNA), la diferencia se transformó en un redescuento remanente que debía ser cancelado en un lapso de 24 meses, además de otorgárseles una reducción transitoria sobre los requisitos de encaje. El Banco Nación representaba por sí mismo el 47% del exceso de circulante total en el sistema (Difrieri, 1967). Los bancos “subexpandidos” (es decir, con efectivo excedente) podrían destinar esos fondos solamente a la constitución de encajes, congelándose la posibilidad de otorgar nuevos préstamos.

Como los créditos oficiales congelados en el BNA, el BIRA y el Banco de la Provincia de Buenos Aires habían alcanzado montos considerables, se hizo necesario consolidarlos. El caso más exorbitante era el del IAPI, en liquidación desde fines de 1955, que mantenía deudas bancarias por casi 20 mil millones de pesos. Para el Banco Nación, los créditos impagos del IAPI y otras empresas estatales había implicado la inmovilización del 44% de su cartera oficial (Bueno, 1960). La operación se efectuó mediante la emisión de un “Bono de Saneamiento” a cargo del gobierno nacional, que el BCRA tomó como cancelación del redescuento otorgado a cada entidad.³ En una operación que repitió lo ensayado en 1935 con el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (IMIB), se revaluaron los activos en oro y divisas del Banco Central a la nueva paridad cambiaria y se imputó parcialmente el saldo al bono. Además, el saneamiento implicó el incremento del capital del BCRA, BNA, BIRA y BHN.

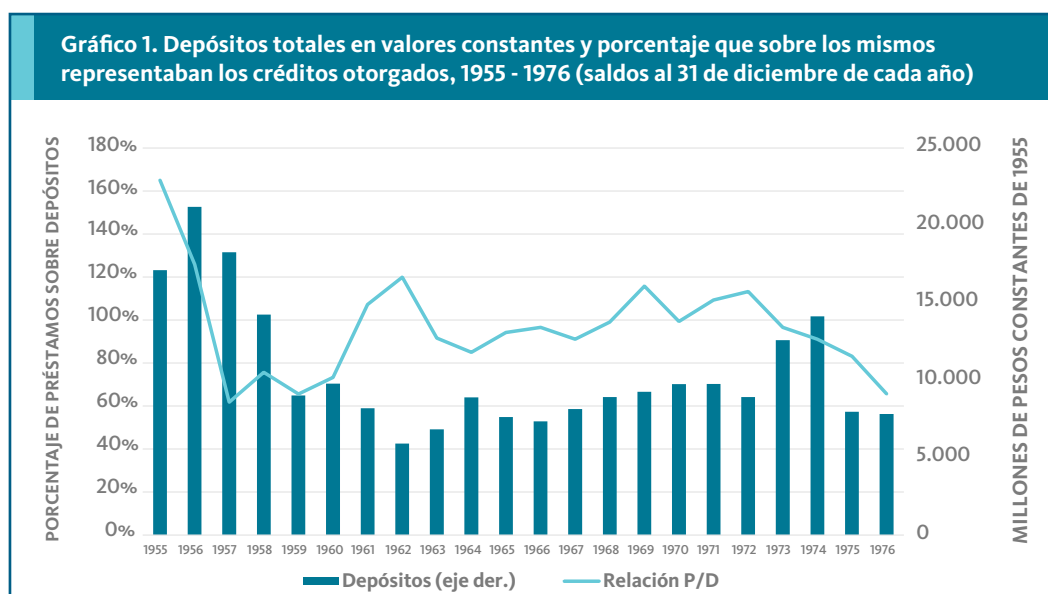
El BIRA se reorientó efectivamente hacia las inversiones de largo plazo con recursos que debía captar en los mercados de capitales. Sus créditos de corto plazo se traspasaron al BNA, que quedó a cargo de atender el financiamiento del capital circulante de las empresas manufactureras. Su cartera industrial se orientó a suministrar recursos para la compra de materias primas y a costear el proceso de distribución de los productos terminados. Por otra parte, fue una de las instituciones rehabilitadas para realizar operaciones externas y de cambio. Entre las principales negociaciones que desarrolló desde 1957 se encontraron la extensión de créditos, garantías y avales para importaciones y exportaciones, la compra y venta de divisas en sus distintas modalidades (contado, a futuro) y de cheques de viajes, la negociación y cobro de remesas de exportación, la recepción y negociación de créditos documentarios de extranjero, la obtención y el otorgamiento de líneas crediticias con instituciones de otros países y finalmente, la ejecución de transferencias y órdenes de pago hacia y desde el exterior.

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, desde 1932 el BNA había tomado posesión judicial por créditos impagos contra el ingenio y refinería azucarera “Santa Ana”, perteneciente a Hileret SA. La búsqueda por mejorar sus rendimientos y productividad, a fin de evitar que arrojara pérdidas para el Banco año tras año, se mostraron infructuosas y finalmente tras varios intentos de ceder el emprendimiento a la provincia de Tucumán o a inversores privados, en 1957 se acordó el traspaso al gobierno de esa provincia, que se hizo cargo de la antigua empresa al año siguiente (Girbal-Blacha, 2001). También se vendió “Barracas y Depósitos Sud América”

³ Las tres entidades públicas transfirieron al Bono deudas inmovilizadas por 25,8 mil millones de pesos, mientras que las instituciones privadas se desprendieron de poco más de 3 mil millones de pesos.

que el Banco manejaba desde los años peronistas; el precio final de venta de estas dos empresas fue de 76 y 114,5 millones de pesos respectivamente.

La reforma financiera implicó un cambio en la proporción entre los depósitos y préstamos del Banco. Si a finales de 1955 la cartera crediticia se encontraba “sobre expandida” en un 65%, rápidamente la situación se invirtió (Gráfico 1). En el primer mes del nuevo sistema los préstamos se redujeron a la mitad (Bueno, 1960). La situación general estuvo caracterizada por una captación de fondos levemente superior al monto de la cartera activa; el promedio para los 22 años analizados arroja una relación de préstamos a depósitos del 97%. Después de la reforma, solamente en cinco ocasiones superaron los primeros a los segundos, en 1961 y 1962, y en 1969, 1971 y 1972 (siendo en 1968 y 1970 del 99%). Las razones deben buscarse en la dinámica de la política económica de esos períodos, como se verá más abajo.



Fuente: Elaboración propia sobre datos de las Memorias y Ferreres (2020).

En el largo plazo, una alta y persistente inflación y el mantenimiento de bajas tasas de interés por parte del BCRA ocasionaron la declinación del coeficiente global de liquidez y la pérdida de peso del sistema bancario formal, sujeto a tasas reales sobre préstamos y depósitos negativas durante todo el período (con la excepción de los años 1968 y 1969). El resultado fue “el retraimiento, en términos reales, del mercado de depósitos y créditos bancarios. Por otra parte, se dio un crecimiento considerable de un sistema financiero no bancario no institucionalizado, así como un cambio en los precios relativos de los activos financieros y reales, con efectos distorsionadores sobre la asignación de recursos” (Feldman, 1983: 39). En ese contexto, los recursos captados por el BNA se expandieron en términos nominales (salvo en 1961 y 1962, bienio de dificultades macroeconómicas), evidenciando que la institución seguía siendo un pilar del sistema financiero. Con todo, en términos reales los valores se redujeron fuertemente (Tabla 1). En pesos de 1955, los depósitos y préstamos se redujeron hasta 1962 y 1963 respectivamente. Luego se expandieron lentamente hasta el estallido inflacionario de 1975.⁴

⁴ Para obtener los valores de préstamos y depósitos a precios de 1955 se deflataron por el Índice de Precios al Consumidor a diciembre de cada año.

Tabla 1: Variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Producto Interno Bruto (PIB), depósitos captados y préstamos otorgados por el BNA, 1955-1976 (en millones de pesos moneda nacional constantes de 1955 y variación interanual en términos reales)

Año	Depósitos		Préstamos		IPC	PIB
	Mill. de m\$ñ	Var. real	Mill. de m\$ñ	Var. real	Var. anual	Var. anual
1955	17.112	-	28.244	-	7,4%	7,1%
1956	21.198	24%	26.688	-6%	16,7%	2,8%
1957	18.270	-14%	11.292	-58%	25,5%	5,2%
1958	14.238	-22%	10.777	-5%	50,8%	6,1%
1959	9.013	-37%	5.912	-45%	101,6%	-6,5%
1960	9.786	9%	7.177	21%	12,1%	7,9%
1961	8.196	-16%	8.785	22%	18,8%	7,1%
1962	5.915	-28%	7.095	-19%	31,8%	-1,6%
1963	6.827	15%	6.254	-12%	27,7%	-2,4%
1964	8.892	30%	7.561	21%	18,1%	10,3%
1965	7.619	-14%	7.176	-5%	38,2%	9,2%
1966	7.348	-4%	7.098	-1%	29,9%	0,6%
1967	8.141	11%	7.414	4%	27,4%	2,6%
1968	8.914	9%	8.832	19%	9,6%	4,3%
1969	9.258	4%	10.718	21%	6,7%	8,5%
1970	9.750	5%	9.686	-10%	21,7%	5,4%
1971	9.759	0%	10.666	10%	39,1%	3,8%
1972	8.913	-9%	10.096	-5%	64,1%	2,1%
1973	12.586	41%	12.156	20%	43,8%	3,7%
1974	14.124	12%	12.861	6%	40,1%	5,4%
1975	7.968	-44%	6.624	-48%	335,0%	-0,6%
1976	7.822	-2%	5.139	-22%	347,6%	0,0%

Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias y Ferreres (2020).

El Decreto-Ley 13.129 que sancionó la nueva Carta Orgánica estableció que el BNA era “una entidad autárquica del Estado” (art. 1°) y le confirió la garantía de la Nación sobre sus depósitos y operaciones (art. 19°). Además de la autonomía en su administración, se elevó el capital a mil millones de pesos (art. 14°). Se mantuvo la prohibición de otorgar crédito a cualquier nivel de gobierno (Nación, provincias o municipios), pero se permitió para “las sociedades mixtas y empresas comerciales o industriales del Estado Nacional, siempre que las mismas tengan un patrimonio independiente del de la Nación, no subsistan de asignaciones del Estado y sus recursos sean suficientes para cumplir sus obligaciones con el Banco” (art. 18°). De todos modos, estas empresas no podían recibir un tratamiento diferencial. Se quiso evitar la posibilidad de que obtuvieran crédito subsidiado y luego no lo cancelaran, generando un nuevo daño patrimonial. De hecho, el porcentaje de créditos oficiales sobre el total de la cartera del Banco pasó del 60% al 10% entre diciembre de 1955 y finales de 1958. Esos montos remanentes fueron absorbidos por adelantos a la Junta Nacional de Granos para la compra de cosechas. La disminución de los préstamos oficiales continuó hasta desaparecer por completo de la cartera del Banco en años posteriores.

El Directorio estaría formado por un presidente, un vicepresidente y ocho vocales y su gestión debía realizarse “de acuerdo con la orientación económica del Gobierno Nacional” (art. 13°). Al inicio de la “Revolución Libertadora” la Presidencia y Vicepresidencia del Banco recayeron sobre Rodolfo Martínez y Juan José Guaresti, siendo reemplazados en junio de 1956 por Carlos Coll Benegas y Enrique Sabena respectivamente (Tabla 2), quienes estuvieron encargados de comandar la institución durante el proceso de la reforma financiera.

Tabla 2: Directorio del BNA en 1955-1957			
	1956 - 1957	Fecha inicio-fin	A julio de 1958
Presidente	Ing. Rodolfo S. Martínez	5/11/1955 a 15/6/1956	Dr. Carlos Coll Benegas
Vicepresidente	Dr. Juan José Guaresti	18/6/1956 a 25/2/1957	Dr. Enrique B. Sabena
Vicepresidente 2°	-	-	Sr. Federico Lajud
Director	Sr. Julio J. Ledesma Padilla Dr. Jorge Castro Nevares Sr. Saturnino Montero Ruiz Dr. Benjamín V. Nazar Blanco Sr. Mario Solanas Pacheco Dr. Leopoldo Figueroa Campero	5/11/1955 a 19/12/1955 5/11/1955 a 14/1/1958 5/11/1955 a 11/9/1956 5/11/1955 a 25/2/1957 5/11/1955 a 14/1/1958 3/10/1956 a 28/11/1957	Sr. Carlos V. Augustoni Sr. Ricardo R. Delrio Sr. Manuel J. Escasany Dr. Emir Mercader Sr. Roberto P. Norton Sr. Abelardo L. Romay Dr. Alberto San Miguel (h)
Gerente General	SD		Dr. Modesto Abad Sagastume

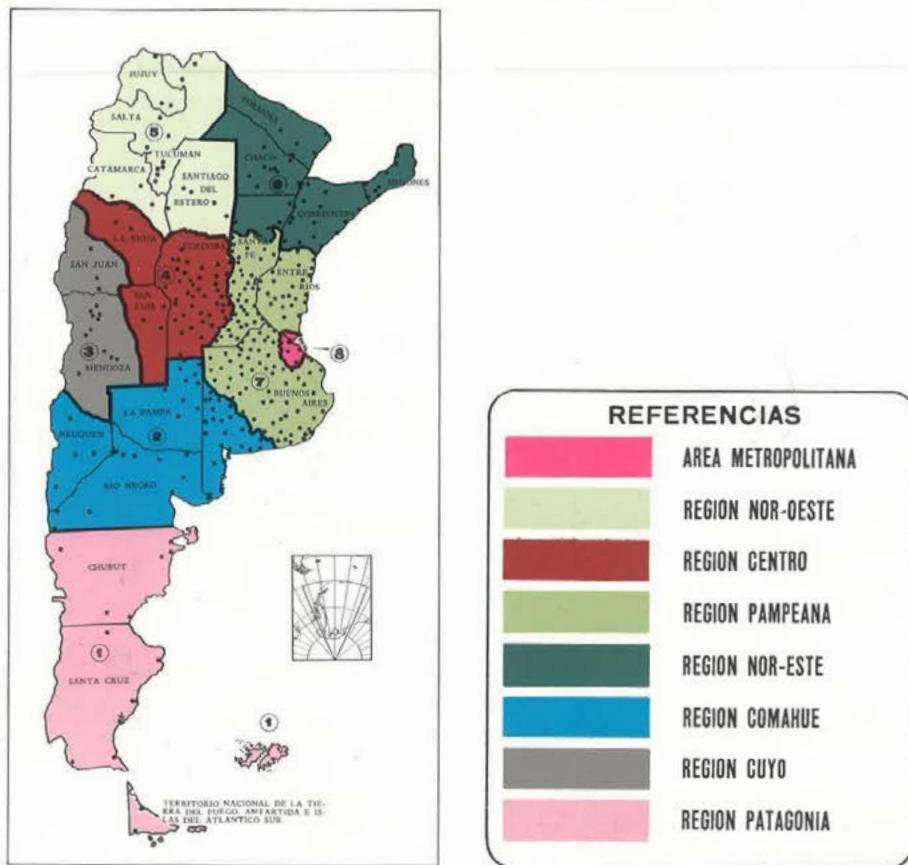
Fuente: elaboración propia sobre Memoria y Balance General 1955-1957.

En términos organizativos, tras la reforma se establecieron tres subgerencias generales: Casa Central y Agencias; Sucursales del Interior; Personal, Administración y Contralor. En favor de la descentralización, se ampliaron las facultades de los gerentes de las sucursales del interior. El proceso de modernización alcanzó también a los sistemas contables y de control del Banco y, para facilitar las operaciones con los corresponsales en el exterior se implantó el sistema telegráfico “Télex”, que permitía transmitir de manera instantánea las operaciones

de cambio. Además, se instaló un servicio de teletipos que permitía la comunicación inmediata de operaciones entre la Casa Central y las sucursales de Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y Santa Fe.

Al año siguiente, en 1958, se establecieron nueve “regiones económicas” en el país, y a cada una de ellas se asignó a un miembro del Directorio para que estudiara sus problemas y propusiesen medidas para que el Banco actuara; en esa tarea colaboraban además funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Unos años más adelante, después de la creación del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) en agosto de 1961 y la definición de ocho regiones económicas, el Banco adecuó su propia división. Se fijaron así ocho “Consejos Regionales de Fomento” (Ilustración 1) coincidentes con los del organismo de planificación; en ellas participaban representantes del Banco “con figuras representativas del quehacer económico de cada sector y de cada zona” (Memoria 1969: 4).

Ilustración 1: Mapa de los “Consejos Regionales de Fomento” del BNA (1969)

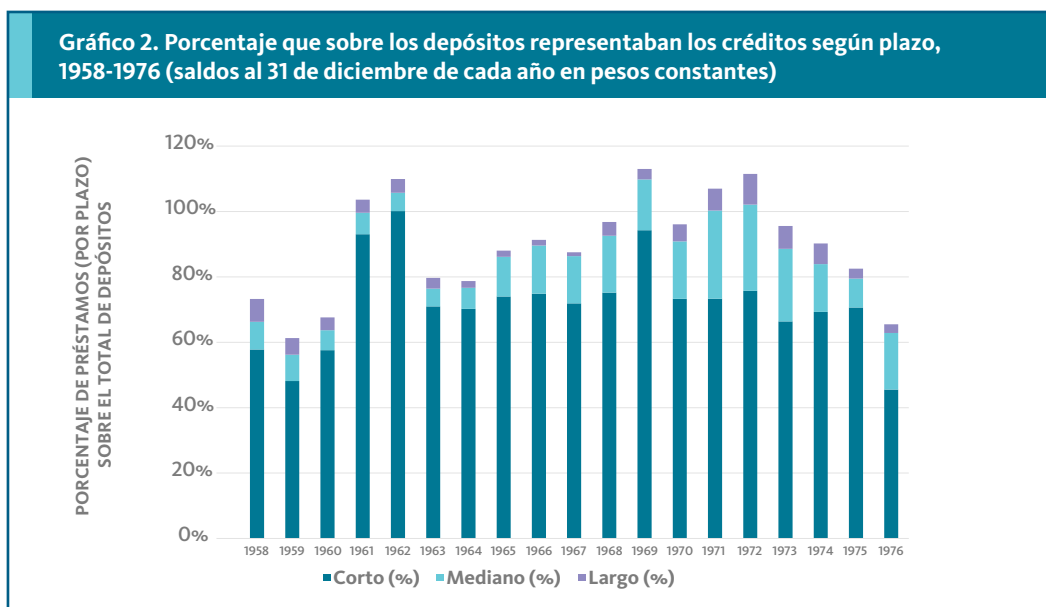


Fuente: Anticipo de la Memoria de 1969, p. 19.

El artículo 4° de la nueva Carta Orgánica estableció que la orientación crediticia del Banco debía “apoyar la producción agropecuaria y atender las necesidades corrientes del comercio y la industria y de las demás actividades económicas del país. Tenderá con su acción a favorecer un sano desarrollo de todos los sectores sociales”. Y en

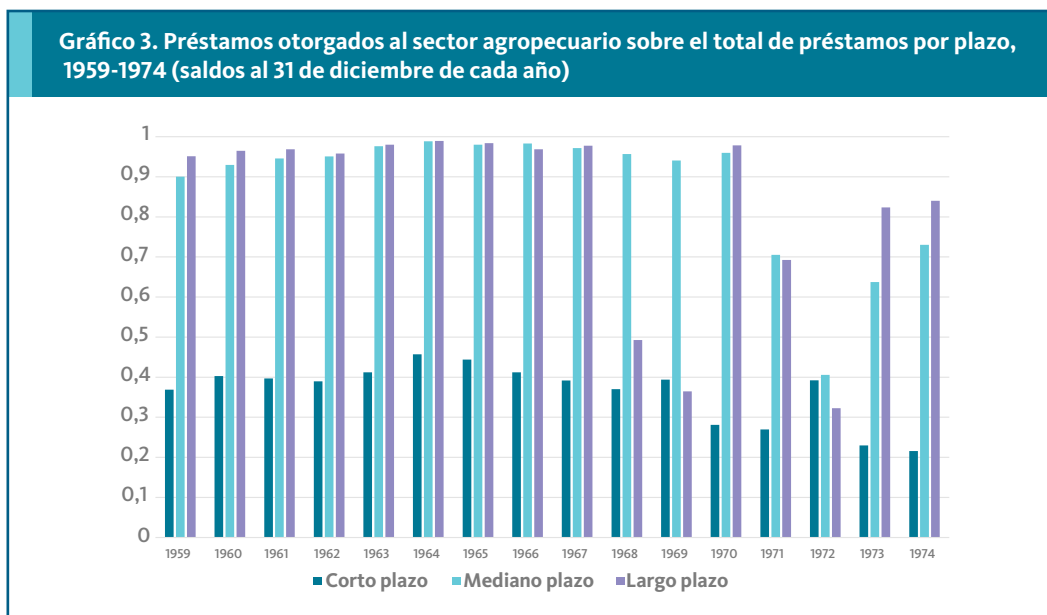
el 16° que “las modalidades de los préstamos se ajustarán a la índole de las actividades en cuestión, particularmente en lo que se refiere a la promoción de las explotaciones agropecuarias”. Esta vinculación con la producción primaria es la que posiblemente explicaba que “cada vez que se ha elevado la exportación de nuestro país se ha constatado una correlativa incrementación de los depósitos al Banco” (BNA, 1970: 300).

Se estipuló además que se consideraban préstamos a mediano plazo los de un horizonte de maduración de 3 a 5 años y de largo plazo los de 6 a 15 años. Al respecto, se fijaban algunas restricciones: el total de préstamos de largo plazo no podía exceder el equivalente al 15% del total de los depósitos ni la suma de préstamos a mediano y largo plazo debía superar el 35% (excluyéndose los depósitos oficiales en la contabilización del límite). De cualquier manera, dichos topes estuvieron siempre lejos de ser alcanzados (Gráfico 2), dando cuenta que en la cartera del Banco preponderaba el otorgamiento de préstamos a corto plazo, acaparando en promedio el 80% del total.



Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias y Ferreres (2020).

La política crediticia del Banco se mantuvo entonces en las necesidades agropecuarias. Si bien esto no era óbice para brindar préstamos no agropecuarios, el manejo de esa cartera una no se diferenciaba demasiado de la de otras instituciones del sistema financiero. Por otra parte, como los plazos productivos solían ser diferentes, las Memorias del Banco alertaban contra la comparación de los créditos acordados a distintas actividades: como para la industria y el comercio se otorgaban a menos de un año, en 12 meses el valor de los acuerdos podía superar en mucho al concedido al sector primario, dando lugar a una lectura errónea de su accionar. Se consideraba adecuado el énfasis otorgado a los préstamos con horizonte de hasta tres años, dado que permitían cubrir adecuadamente la formación de capital en las actividades agropecuarias. De todos modos, el sector agropecuario acaparó la mayor parte del crédito de mediano y largo plazo (Gráfico 3).

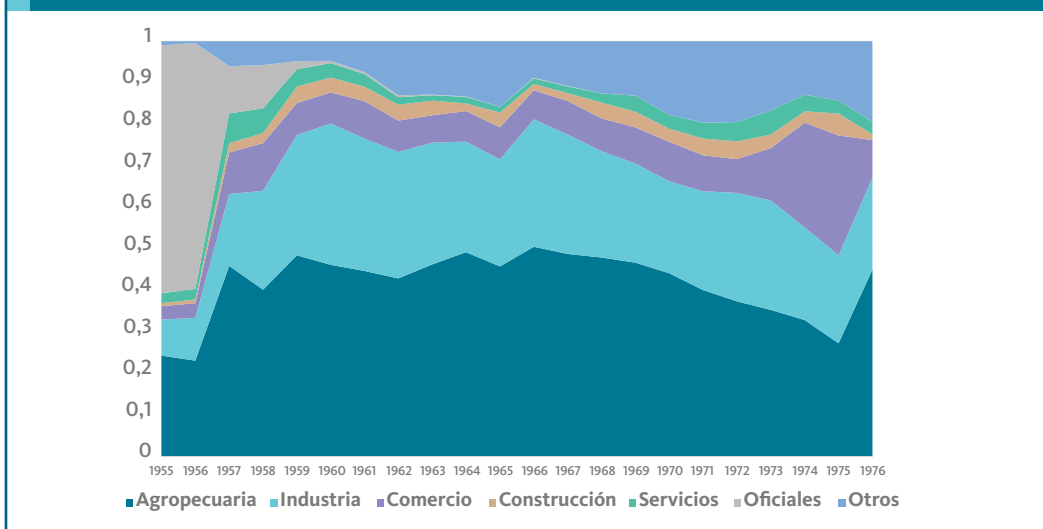


Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias.

En 1955 y 1956 mantuvo preponderancia el crédito oficial. De todos modos, tras la reforma, se moderó la expansión del crédito agropecuario porque se consideró que la mejora de sus ingresos gracias a la devaluación y la liberalización de precios era el principal mecanismo de apoyo para el sector. Por otra parte, el Directorio aclaró que el crecimiento de los préstamos industriales en esos años se debió en gran parte a la absorción de la cartera de corto plazo del BIRA. Como institución avalista de créditos externos, también cumplió un papel importante con la negociación de financiamiento con el Eximbank para la importación de maquinarias viales en 1957.

En promedio, entre 1955 y 1976 el agrupamiento de actividades agropecuarias recibió el 44% de los fondos prestados, mientras que las “actividades diversas” (industria, comercio, servicios, turismo y otros) acapararon el 48% del total. Es de notarse que entre 1966 y 1975 perdió cierta importancia el crédito agropecuario, llegando a un mínimo del 27% del total, desplazado por el crédito comercial y destinos diversos sumados en el rubro “otros”. En parte, eso se explica por la expansión de los créditos personales y a las exportaciones “no tradicionales”, pero más importante fueron los recursos otorgados (para comercialización) a la Junta Nacional de Granos durante el tercer gobierno peronista, como se explica más abajo. En general, el financiamiento destinado al comercio, la industria y los servicios estaba vinculado a procesos de venta y transformación de las materias primas agropecuarias: “la asistencia prestada a estos sectores económicos, como es tradicional, tiende esencialmente a facilitar la circulación de la producción primaria en forma ágil, y representa un complemento del apoyo directo al sector agrario, ya que contribuye a su normal evolución financiera en la época de comercialización de sus cosechas. Correlativamente, se atiende en forma importante a la industria que provee al agro de sus elementos de trabajo” (Memoria 1965: 21). En suma, el Directorio del BNA no dejaba de señalar que su objetivo primordial era el apoyo “directo o indirecto” de las actividades agropecuarias.

Gráfico 4. Fondos otorgados por sectores de actividad seleccionados sobre el total prestado, 1955-1976 (saldos al 31 de diciembre de cada año)



Nota: los sectores económicos seleccionados son aquellos que, por lo menos en algún año del período, superaron el 5% del total de la cartera crediticia.

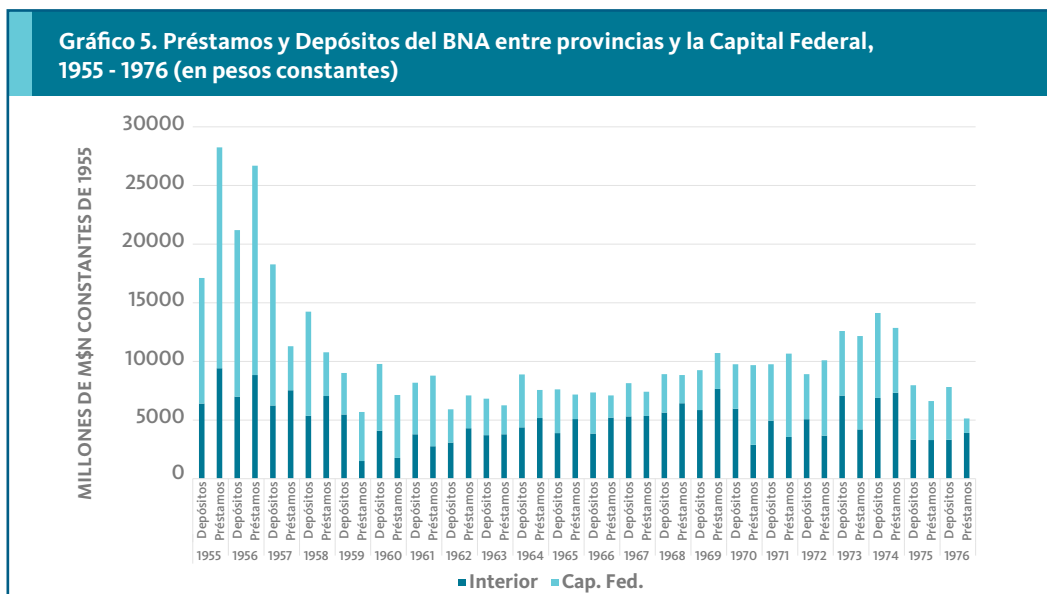
Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias.

En septiembre de 1957 se modificó la normativa para el otorgamiento de créditos hipotecarios rurales, unificando la operatoria de tres regímenes diferentes: los destinados a la adquisición de inmuebles, para la introducción de mejoras y los de incrementación agropecuaria fueron agrupados bajo un reglamento simplificado. En el mismo ámbito, otro cambio de importancia fue el fin de las tareas adjudicadas al BNA durante el peronismo en favor de la expropiación, adquisición y colonización de tierras. La nueva Carta Orgánica establecía un plazo de seis meses para que el gobierno decidiera qué organismo sería encargado de continuar la actividad colonizadora. Sí se mantuvieron durante los siguientes años los créditos a un sector que tradicionalmente la institución había apoyado: las organizaciones cooperativas de productores, industriales y comerciantes agrícolas (molinos harineros y aceiteros, ingenios azucareros, hilanderías, frigoríficos, acopiadores y exportadores) recibían financiamiento especial con el objeto de facilitar el almacenaje, la circulación interna, la comercialización y la transformación industrial de las cosechas.

Desde el punto de vista regional, se puede analizar la acción promocional del Banco tomando en cuenta la captación de depósitos y el otorgamiento de préstamos entre la Capital Federal y las provincias (Gráfico 5). Como advertencia, los valores agregados no permiten apreciar en su justa medida los flujos regionales de los recursos. Sin negar que la concentración económica seguía siendo preponderante en la ciudad de Buenos Aires y su zona adyacente (Coviello y Rougier, 2022), habría que tomar en consideración que muchas firmas que realizaban sus operaciones en la Casa Central o en agencias porteñas, pero solamente tenían allí sus administraciones centralizadas, siendo que sus establecimientos se encontraban en el interior del país. Más allá de no poder cuantificar ese efecto, si se considerara el lugar real de operatoria productiva los valores tenderían a mostrar una menor importancia de la Capital de lo que aquí se presenta.⁵ Durante la

⁵ Bartolomé Bavio hizo una detallada tesis doctoral sobre el funcionamiento del sistema bancario en las distintas zonas del país para la década de 1960. Si bien su análisis no era específico sobre el Banco Nación, de la lectura se deriva claramente la centralidad que tenía la institución fuera de la Capital Federal. Al referirse a la provincia de Buenos Aires, señalaba que los grandes bancos estatales (de entre los cuales el BNA era el primero) "por razones de política bancaria y económica, son reticentes a establecerse en el Gran Buenos Aires y acompañar la creciente evolución comercial e industrial de dicha zona, prefiriendo mantenerse en el interior de la provincia para fortalecer una acción de fomento agropecuario y de desarrollo regional", marcando la línea de acción general de esas instituciones (Bavio, 1967: 81).

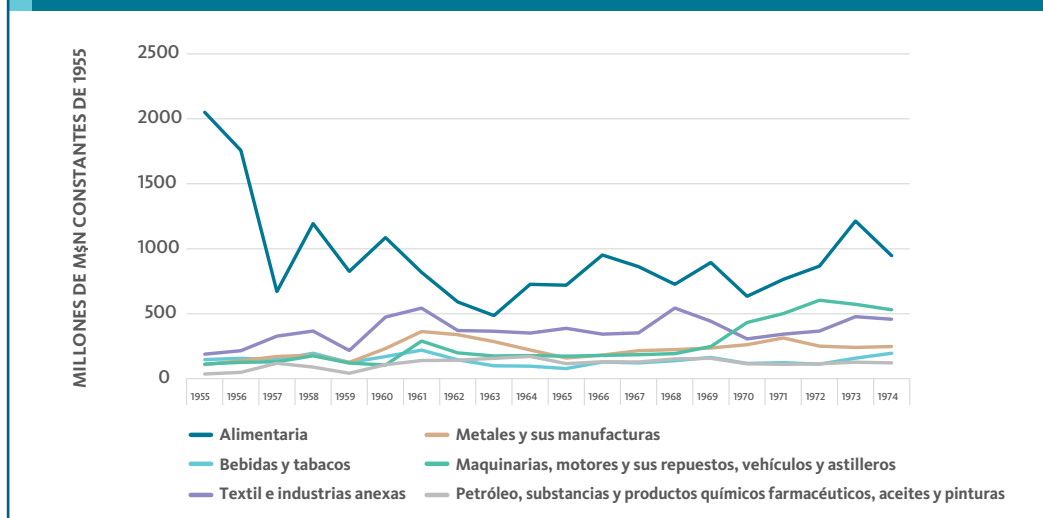
segunda mitad de los años cincuenta la preeminencia tanto de depósitos como de préstamos estuvo mayormente asentada en la ciudad de Buenos Aires. Entre 1962 y 1969 la situación se revirtió en favor de las provincias. Y a principios de los setenta, con algunas excepciones, los depósitos se captaron relativamente más intensamente en el interior mientras los préstamos se otorgaron primeramente en sucursales de la capital.



Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias y Ferreres (2020).

Si se observan subsectores más específicos, las actividades industriales se ubicaron en la primera posición como receptoras de crédito del BNA, ya que -si se excluyen los años de la “Revolución Libertadora”, distorsionados todavía por la cartera oficial- las adjudicaciones estuvieron entre un tercio de los recursos prestados por el Banco (nivel alcanzado en 1960) y un mínimo del 21% en 1975. Entre las principales ramas industriales que recibieron préstamos se contaban molinos harineros, ingenios azucareros, bodegas, fábricas de aceite, textiles y metalúrgicas. En este último caso, se favorecía a fabricantes de maquinarias e implementos agrícolas; en los otros, como es evidente, se trataba de demandantes de productos agropecuarios. En valores agregados y constantes, la rama procesadora de alimentos ocupó el primer lugar durante todo el período (Gráfico 6). La industria textil ocupó el segundo puesto hasta 1969, cuando fue desplazada por los fabricantes de maquinarias. Oscilando entre la tercera y la cuarta posición durante todo el período se puede hallar a la rama metalúrgica, develando el avance del proceso de complejización de la estructura manufacturera nacional.

Gráfico 6. Préstamos industriales otorgados a ramas seleccionadas, 1955-1974 (en pesos constantes)



Nota: las ramas seleccionadas son aquellas que, por lo menos en algún año del período, superaron el 5% del total de la cartera industrial.

Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias y Ferreres (2020).

En el análisis de sus autoridades, entre el golpe de 1955 y el de 1976 se sucedieron 17 presidentes al frente del Banco Nación (Tabla 1). Si bien, aparentemente, cada uno de ellos debería haber ocupado el cargo en promedio por algo más de doce meses, la dinámica de sus nombramientos tuvo una evolución dispar. Solo nueve directivos superaron el año, mientras que otros cinco estuvieron seis meses o menos en el cargo. La inestabilidad política del país tenía impacto sobre la conformación del cuerpo de autoridades de la institución. Sólo Lorenzo Arufe y Saturnino Llorente lograron superar los dos años en la Presidencia, durante los gobiernos de Illia y Onganía respectivamente. Por su parte, Carlos Coll Benegas estuvo a un mes de cumplir los dos años como presidente del BNA y Mario Martínez Casas fue designado dos veces (de 1958 a 1959 y de 1969 a 1970), superando por poco el año en cada una de esas ocasiones.

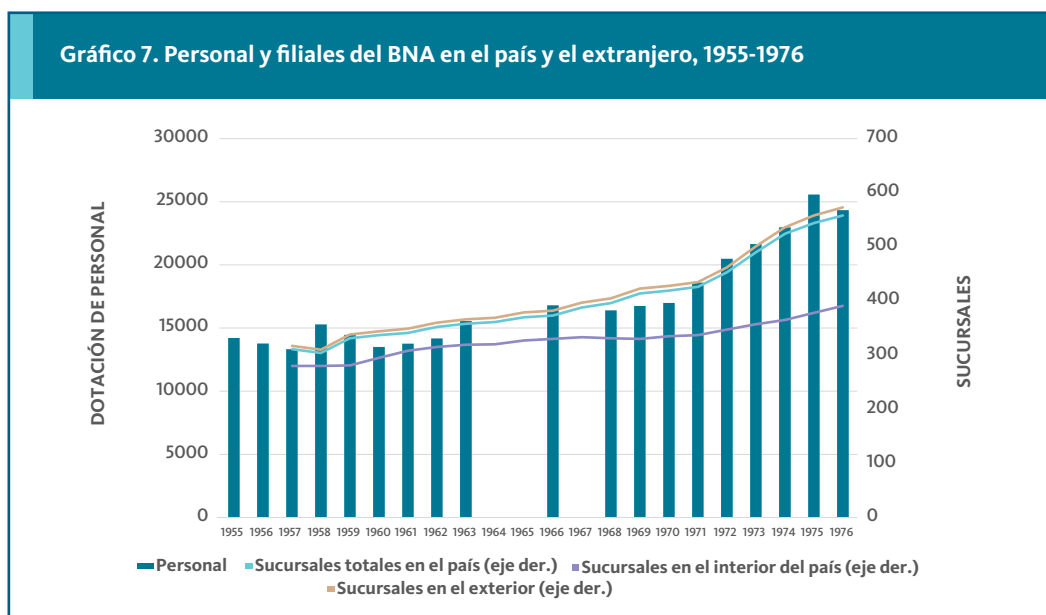
Tabla 3: Presidentes del BNA, 1955-1976

Presidente	Desde	Hasta	Meses
Martínez, Rodolfo Secundino	5/11/1955	15/6/1956	7
Coll Benegas, Carlos A.	18/6/1956	21/5/1958	23
Martínez Casas, Mario Ramón	30/5/1958	31/7/1959	14
Robirosa, Jorge A.	3/8/1959	4/5/1961	21
Mazar Barnett, José	11/5/1961	15/1/1962	8
Freaza, Julián Francisco	1/2/1962	9/5/1962	3
Polledo, Luis A.	9/5/1962	26/12/1962	7
Murua, José	27/12/1962	14/11/1963	11
Arufe, Lorenzo J.	15/11/1963	4/7/1966	32

Presidente	Desde	Hasta	Meses
Martínez Mora, Antonio	4/7/1966	24/8/1966	1
Llorente, Saturnino	24/8/1966	13/6/1969	34
Martínez Casas, Mario Ramón	6/8/1969	3/9/1970	13
Gilardi Novaro, Enrique S.	16/11/1970	26/3/1971	4
Bermúdez Emparanza, Jorge	23/4/1971	27/7/1972	15
Nosiglia, Mario Raúl	18/8/1972	30/5/1973	9
Paz, Juan Carlos	30/5/1973	31/10/1974	17
Ares, Roberto A.	4/11/1974	15/1/1976	14
Caballero, Luis Miguel	9/2/1976	24/3/1976	1

Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias anuales.

Finalmente, de acuerdo con los datos disponibles, se puede notar que durante la primera década del periodo analizado la dotación de personal se mantuvo relativamente estable en torno a los 15 mil agentes (Gráfico 7). A partir de 1966 creció notablemente, hasta un máximo de casi 26 mil personas empleadas en 1975. En paralelo, el total de filiales se expandió cada año, tanto en el territorio nacional como en el exterior. Las agencias, subagencias y oficinas del BNA en otros países pasaron de 6 en 1957 a 15 veinte años más tarde. Al mismo tiempo, las representaciones permanentes en el país se expandieron de 317 a 558 en 1976. El aumento de la presencia territorial del Banco se verifica en la multiplicación de sus sucursales en el interior, cuyo número pasó de 280 a 391 en los años considerados.



Nota: en el total de filiales se suman la Casa Central, las sucursales, agencias, subagencias, oficinas y delegaciones en actividad cada año para llegar al total de representaciones permanentes del Banco (dejando fuera del cálculo a agentes móviles, "minibancos" y corresponsales particulares y bancarios).

Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias.

El Banco de la Nación Argentina durante el gobierno desarrollista

Tras la reorganización política ensayada por la “Revolución Libertadora”, se convocó a elecciones. En mayo de 1958 Arturo Frondizi asumió la Presidencia Nacional por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), gracias al aporte de los votos del peronismo (proscrito) y un programa electoral de contenido nacionalista y estatista. Sin embargo, a poco de iniciado el gobierno emprendió un giro a sus políticas. Según el diagnóstico del equipo económico encabezado por Rogelio Frigerio -principal asesor económico del presidente-, debía alentarse la inversión externa para superar el desequilibrio del balance de pagos, ya que el deterioro de la capacidad financiera del Estado le impedía ocupar un lugar central como impulsor del desarrollo. El objetivo era superar el estancamiento derivado de una industrialización incompleta. La prédica frigeriana sostenía que no había alternativas ante la restricción externa: o se estrangulaba la producción interna para disminuir las importaciones o se acudía al capital extranjero para profundizar la sustitución de importaciones en actividades “básicas” como la siderurgia y la petroquímica, para las cuales la capacidad de movilizar el ahorro nacional era considerado insuficiente (Rougier y Odisio, 2017).

En diciembre el gobierno formuló un “Plan de Estabilización Monetaria y Desarrollo Económico” con apoyo del FMI. La llamada al capital extranjero se conjugó con la promoción de la industria pesada, la modernización de la infraestructura económica y la ampliación de la base energética, especialmente alentada por la autosuficiencia petrolera, principal rubro deficitario del balance comercial. Con el nuevo gobierno se renovó el Directorio del Banco, que reajustó su accionar con la nueva orientación. El otorgamiento de recursos prestables debía orientarse hacia el estímulo de la producción; y en especial, a las actividades que generaran o ahorraran divisas en el corto plazo y en condiciones económicas “aceptables”. El gobierno impulsaba a que las empresas (nacionales, pero sobre todo extranjeras) se financiaran en el exterior; en muchos casos el Banco brindó los avales necesarios. Por otra parte, se mantuvo la restricción al crédito de largo plazo.

Al mismo tiempo, se dispuso que aquellos sectores con ingresos adicionales gracias a la devaluación debían dejar de demandar crédito en un monto equivalente a ese incremento, para poder destinar esos recursos a empresas que necesitaban de mayor apoyo bancario. Otra norma restringió la financiación de bienes de activo fijo al 50% del total de cada inversión según estimación del Banco, y se solicitó a las firmas que reinvertieran sus utilidades, especialmente en la renovación de equipos, con el objetivo de reservar el crédito bancario a las necesidades corrientes. Finalmente, se debía observar que el financiamiento no fuera empleado con fines especulativos ni en usos diferentes a los solicitados y que los plazos debían ir en concordancia con las necesidades de los procesos productivos. En suma, la estrategia desarrollista impuso al Banco una política de contención y selectividad crediticia.

El programa de Frondizi y Frigerio también remarcaba la necesidad de reactivar las zonas geográficas consideradas “atrasadas”; aquellas que habían quedado poco integradas a las economías más pujantes del litoral pampeano. Además de inmoderados planes de inversión pública en infraestructura de transportes y energía -que tenían como uno de sus objetivos impulsar el desarrollo productivo del interior-, a partir de 1960 la política financiera del BNA promovió programas de crédito específicos para las economías de Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis y Santiago del Estero, a las que se añadió Jujuy al siguiente año.

En referencia al financiamiento del sector primario, la Ley 14.451 de “Transformación Agraria” sancionada el 31 de julio de 1958, había otorgado al Banco un papel importante con dos finalidades de fomento. Por un lado, préstamos para que arrendatarios o aparceros rurales pudiesen comprar los predios que trabajaban. Por otro, crédito para la adquisición de inmuebles rurales para hijos de pequeños productores rurales, o para pequeños y medianos propietarios o arrendatarios rurales, o para asociaciones de pequeños productores y cooperativas

agrícolas, siempre que el predio no superara la superficie de una explotación definida como “mediana”.

Poco antes de que asumiera Frondizi, el 14 de marzo de 1958 se había creado el Consejo Agrario Nacional que tomó la responsabilidad por la colonización agraria. Ya desde el golpe de 1955 el Banco había limitado su acción en esta área, con el conocimiento de que se establecería un organismo para suplirlo en esa tarea. En mayo de 1960 se suscribió el convenio para transferir los bienes y el personal correspondiente al Consejo. Eso no alteró el hecho que la mayor parte del apoyo financiero de la institución siguió teniendo como destino el sector agrario. El Directorio no dejaba de recalcar la “antigua vocación” del BNA al respecto, e identificaba los objetivos generales y los mecanismos desplegados para cumplirlos:

El Banco tiene instituidos en favor del agro, préstamos que, por su variedad y amplitud, contemplan adecuadamente todas las necesidades de los productores rurales, desde la financiación requerida para adquirir la tierra, introducir en ella las mejoras necesarias y comprar los elementos de trabajo, hasta los créditos indispensables para arar, sembrar, cultivar, recoger y comercializar los productos agropecuarios. En esta forma la Institución cumple con lo dispuesto en su estatuto legal y se mantiene fiel a su antigua vocación de instituto al servicio del campo argentino.

El apoyo del Banco a las faenas rurales se efectúa por doble conducto. Por un lado, mediante el crédito directo a las actividades primarias (agricultura y ganadería) y, por otro, a través de la financiación que se otorga a las cooperativas, acopiadores y establecimientos fabriles para facilitar el proceso de comercialización e industrialización de los productos (Memoria 1959: 23).

En 1958 los créditos para la financiación automotor tuvieron un gran incremento, y aunque no se sostuvo durante los años posteriores, da cuenta del impacto que la estrategia de industrialización de la época tenía sobre los lineamientos del Banco. Por otra parte, dentro del subtotal de créditos industriales y para construcción, el rubro de empresas alimenticias absorbió más del 40%. La principal actividad apoyada fue la azucarera, afectada por problemas de mercado y productividad desde hacía décadas, lo que generaba además preocupación por la creciente conflictividad en las provincias del Norte, en especial en Tucumán. Para fines de 1959 los préstamos (tanto agrarios como industriales) otorgados a productores de la cadena del azúcar absorbieron el 12,5% de la cartera total del Banco. El gobierno implementó medidas de racionalización de la producción azucarera en 1960, lo que motivó que los nuevos préstamos del BNA al sector tuvieran como condición el compromiso de limitar la producción y de alcanzar ciertas cuotas de exportación, que no se cumplieron. Además, se desplegaron líneas especiales de crédito para la diversificación de los cultivos en la provincia. Finalmente, en otro renglón diferenciado, referido en este caso a la actividad forestal, si bien el Banco solía brindar apoyo para la explotación de bosques dentro de su régimen agropecuario general, en 1958 se estableció un sistema especial para la forestación y la reforestación, mediante el cual el Banco operaba por cuenta y orden de la Administración Nacional de Bosques sobre una fuente de recursos propia, que provenía en un 70% de un impuesto sobre la importación de madera.

En enero de 1959 el Banco Central puso en vigor la Circular B.236 con nuevos lineamientos a seguir en el otorgamiento de los préstamos. Si bien reprodujo en parte importante la normativa de 1951, incorporó algunas precisiones que daban cuenta de la orientación desarrollista. En primer lugar, enfatizaba la necesidad de promover la producción de bienes que permitieran ahorrar o producir divisas y la construcción de viviendas urbanas o rurales, siempre que no fueran suntuarias y estuvieran destinadas a la residencia permanente. Además, estableció de manera más estricta las cuestiones a tener en consideración en el análisis de las solicitudes de crédito, entre las cuales señalaba que se debía propender a la consolidación económico-financiera de las empresas (y por lo tanto no se debía apoyar

a firmas que realizaran retiros de fondos o distribución de utilidades “en medida no razonable ni justificada”), e incluyó mayores requisitos y límites para el financiamiento de operaciones de comercio exterior. Lo que se mantuvo inalterado fue la exclusión de los créditos para financiar el consumo. Mediante la Circular B.303 de 1961 el BCRA estableció nuevos topes para el financiamiento industrial a mediano plazo (préstamos de hasta 5 años), pasando del 25% al 35% sobre el total de depósitos de cada institución, pero excluyendo de la limitación al BNA y al BIRA.

A pesar de los planes y esfuerzos del gobierno, la inflación se aceleró: en 1958 duplicó el valor precedente y los precios superaron el 50% de variación respecto al año previo, y en 1959 se duplicó nuevamente para marcar un récord por encima del 100% interanual (Tabla 1). Las empresas enfrentaron presiones en sus costos y “los empresarios recurrieron al crédito bancario en mayor medida que en años anteriores, ya que la capitalización de sus utilidades resultó en muchos casos insuficiente para financiar las necesidades emergentes de aquel incremento de los costos” (Memoria 1958: 26). Por otra parte, el gobierno propició un efímero auge en la Bolsa de Valores que el Directorio observó con expectativa. A finales de 1960 se puso en funcionamiento un régimen especial para que empresas cotizantes pudieran financiar aumentos de capital mediante la emisión de acciones. Aunque el boom bursátil no se sostuvo después de 1961, el Banco tuvo importante intervención en la canalización de operaciones de suscripción de valores accionarios y negociación de letras de Tesorería, que implicó el manejo de cuantiosos recursos de ahorristas e inversores.

Frente al incremento de los costos y la caída del poder de compra, muchas empresas industriales enfrentaron problemas para colocar su producción en el mercado local. El gobierno desplegó a finales de 1959 las primeras medidas con “carácter experimental” para facilitar la exportación de productos “no tradicionales” o “promocionados”, mediante la autorización para que el Banco Central comprara letras en moneda extranjera con plazo de hasta tres años emitidas por el BNA y el BIRA contra la exportación de productos industriales fomentados. Asimismo, se instauró un régimen de draw-back; es decir, de devolución de aranceles e impuestos pagados sobre insumos importados utilizados para elaborar manufacturas de exportación. En general, se abrigan esperanzas de incrementar la colocación de productos industriales en el mercado regional; sobre todo en 1960 tras la firma del Tratado de Montevideo que creó el Área Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reafirmada en agosto del siguiente año con la formación de la Alianza para el Progreso y la promesa de que EEUU aportaría 20.000 millones de dólares para fomentar el desarrollo y la integración latinoamericana.

El BID -entidad destinada a promover la inversión de capitales, proveer asistencia técnica y fomentar la cooperación entre países del continente- se asoció con el BNA en varios programas durante los siguientes años. Al respecto, las líneas más importantes fueron las de tecnificación agropecuaria, de electrificación rural y de crédito de crédito agrícola orientado, como se detalla más abajo. El Banco abrió además nuevas sucursales en el exterior, que se sumaron a las que ya tenía en Paraguay (la agencia en Asunción había sido inaugurada en 1942, de la cual dependían tres subagencias: Concepción, Encarnación y Villarrica). En 1958 se inauguraron otras dos filiales en Bolivia (agencia en La Paz y subagencia de Santa Cruz de la Sierra), una agencia en Río de Janeiro en febrero de 1960 y otra en Montevideo y una oficina en Punta del Este al año siguiente. La institución tendría destacada participación en el despliegue de medidas financieras dentro la reorientación exportadora de la política económica, que llegaría a cambiar el carácter del modelo de industrialización argentina al consolidar una particular “conciencia industrial exportadora” en el transcurso de la década (Odisio y Rougier, 2019).

El gobierno frondizista no logró apaciguar la lucha sindical y política. Ante su creciente debilidad, la respuesta fue adoptar un mayor compromiso con los sectores conservadores y militares, lo que llevó a Álvaro Alsogaray al Ministerio de Economía y Trabajo entre junio de 1959 y abril de 1961. En ese marco se intentaron “racionalizar”

los gastos del Estado, disminuyendo el gasto público y reduciendo su participación en empresas industriales y de servicios. El BNA tuvo que adecuarse, y en 1959 y 1960 su plantilla laboral se redujo en casi 1.800 personas. La situación macroeconómica continuó empeorando en 1961, lo que puso en aprietos al sistema bancario. En marzo del siguiente año Frondizi se negó a anular las elecciones legislativas y provinciales en las cuales había triunfado el peronismo. En un contexto de creciente adversidad política y económica, se produjo su derrocamiento. La debilidad política del gobierno se manifestó también en los elencos directivos del Banco (Tabla 4). Durante la experiencia desarrollista, a partir de la ya aludida gestión de Coll Benegas y más allá de cierta estabilidad lograda en los años de 1959 y 1960, se sucedieron seis Directorios en cuatro años.

Tabla 4: Directorio del BNA entre 1958 y 1962

Período	Presidente	Vicepresidente	Vicepresidente 2°	Directores
1958	Dr. Mario Martínez Casas	Dr. Agustín Cuzzani	Sr. Roberto A. Uhia	Sr. Raúl Pablo Bassani Dr. Roberto V. E. Escardó Sr. Carlos Federico Heinberg Sr. José P. Hernández Dr. Juan Francisco De Larrechea Dr. César Alfredo Noguera Sr. José Lucio Orlando
1959-1960	Dr. Jorge A. Robirosa	Dr. Agustín Cuzzani	Sr. Roberto A. Uhia	Dr. Roberto V. E. Escardó Dr. Juan F. De Larrechea Dr. José Murúa Dr. César A. Noguera Sr. José Orlando Sr. Carlos G. Posadas Sr. Abelardo L. Romay
A mayo 1961	Sr. José Mazar Barnett	Dr. Agustín Cuzzani	Sr. José L. Orlando	Dr. Juan Carlos de Kemmeter Sr. Juan Benito Legeren Sr. Francisco Martín Vera Dr. César A. Noguera Sr. Norberto Parmigiani Dr. Lorenzo S. Quinn Wade Sr. Roberto A. Uhia
A mayo 1962	Dr. Julián F. Freaza	Dr. Agustín Cuzzani	Sr. José L. Orlando	Dr. Juan C. De Kenmeter Sr. Juan B. Legeren Sr. Francisco Martín Vera Dr. César A. Noguera Sr. Norberto Parmigiani Dr. Lorenzo S. Quinn Wade Sr. Roberto A. Uhia

Nota: por cuestiones de espacio no se incorpora la columna de Gerentes Generales, que en los cinco subperiodos identificados fueron, respectivamente, Modesto Abad Sagastume, José A. Garín, Alfredo Fernández, Carlos Alberto Couceiro y nuevamente Alfredo Fernández.

Fuente: elaboración propia sobre Memorias, 1958-1962.

El Banco de la Nación Argentina en la primera mitad de los años sesenta

Entre los problemas legados por el gobierno desarrollista (inflación, déficit externo y fiscal), el nuevo Directorio del BNA destacaba a la política de industrialización y financiamiento como su causante: “En la práctica se favoreció la industrialización y el desarrollo indiscriminado en una medida que excedía las posibilidades financieras. Esa falta de relación entre medios y magnitud de crecimiento determinó un nuevo factor de presión inflacionista que se sumaba a los ya existentes” (Memoria 1962: 16).

Con la anuencia de las fuerzas armadas, asumió la Presidencia el presidente provisional del Senado, José María Guido. En el año y medio que ocupó el cargo pasaron por el Ministerio de Economía cinco figuras de similar orientación: Jorge Wehbe, Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray, Eustaquio Méndez Delfino y José Martínez de Hoz. La tónica liberal primó en la política económica; se intentó regresar al equilibrio fiscal, laboral y monetario mediante medidas de “ajuste”. El sector industrial enfrentó una grave crisis, afectando al mercado de trabajo y agregando más problemas a los existentes. En ese contexto favorable al liberalismo, desde el Banco se remarca el sostén que debía brindarse al agro, mientras que para la industria se hacían reparos; solo se mencionaban los sectores “dignos de apoyo” que no debían “descuidarse” frente a la “preferente asistencia” brindada a los productores primarios. Llamativamente, el discurso recordaba al del “Plan Pinedo” de 1940 y su defensa de la agroexportación como “rueda maestra” de la economía nacional:

su Carta Orgánica indica claramente como uno de sus fines preponderantes, el apoyo a la producción agropecuaria, que como se ha podido apreciar, sigue siendo todavía el gran proveedor de divisas y, por lo tanto, factor de indudable gravitación económico-financiera... Es necesario alcanzar el equilibrio entre la producción agraria y el complejo industrial digno de apoyo... Nuestra tierra fértil, ayudada por capital, técnica y trabajo, puede lograr elevados rindes, que servirán de base para mantener y aun acrecentar el ritmo industrial y, a la vez, para elevar los saldos exportables de productos primarios y manufacturados... El volumen de la producción agropecuaria constituye el pivote alrededor del cual gira nuestra potencialidad económica y nuestra capacidad de compra en el exterior... La Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina tiene un especial significado cuando prevé preferente asistencia a este sector, sin descuidar, por cierto, las otras actividades igualmente apoyables (Memoria 1962: 20).

En abril de 1962, Pinedo decidió dejar de intervenir en el mercado cambiario, frente a una sangría de reservas del Banco Central que llevaba meses. El peso se devaluó más del 60%, con fuertes repercusiones que llevaron a la renuncia del ministro unos días más tarde. La crisis económica se agudizó, impactando sobre el mercado financiero. El gobierno inició negociaciones para obtener un nuevo préstamo del FMI y reestablecer el financiamiento externo. Semanas más tarde, ante una crisis externa y fiscal que no cedía, Alsogaray (nuevamente ministro) emitió bonos del “Empréstito de Recuperación 9 de Julio” para abonar a proveedores y empleados del Estado, cuyos pagos se habían interrumpido desde finales de 1961. En esa difícil coyuntura, el Banco se ocupó de la colocación de los títulos y fue el principal agente de suscripción. Para fomentar la participación de pequeños inversores, el Directorio bonificó los cargos sobre operaciones menores a los 20 mil pesos y renunció al 1% de comisión que le correspondía como institución colocadora de títulos.

Como se señaló, muchas empresas habían adquirido créditos en el exterior con avales y cartas de crédito de la institución. Ante la acción combinada de una menor demanda interna y divisas más caras por la devaluación, debieron enfrentar situaciones de iliquidez o incluso de quebranto. Por el incumplimiento de los compromisos externos de clientes avalados, el sistema bancario en su conjunto debió enfrentar una inesperada posición

deficitaria sobre los requisitos de efectivo mínimo, que pasó de m\$ñ 2.900 a 14.600 millones entre diciembre de 1961 y doce meses más tarde. El BNA se vio envuelto en fuertes tensiones y, de hecho, las autoridades que asumieron tras el golpe denunciaron penalmente a sus predecesores por la “incontrolada política” seguida el año previo que había llevado la relación préstamos a depósitos a superar el 100% (Gráfico 1).⁶ El nuevo equipo implementó una política de reordenamiento: se obtuvo un adelanto de más 5.600 millones de pesos del BCRA, se realizaron gestiones para incrementar la captación de depósitos y se restringieron los créditos. Al cabo de un año el Banco había superado la delicada situación y logró revertir el déficit de encajes que, en su momento más álgido (septiembre de 1962), había superado los m\$ñ 7.700 millones.

Rehabilitadas las elecciones (pero no el peronismo), en octubre de 1963 asumió el gobierno Arturo Illia bajo la bandera de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El panorama macroeconómico parecía haber dejado atrás lo peor gracias a la mejora de la actividad agropecuaria (fuertemente castigada por cuestiones climáticas en los años previos), indicios de restablecimiento industrial, una inflación decreciente y bajo control, y la recuperación del superávit comercial por la propia crisis. Las autoridades se plantearon la necesidad de fijar las condiciones para superar las trabas estructurales de largo plazo, para lo cual comenzaron a preparar un Plan de Desarrollo, a la vez que se buscaba recuperar el crecimiento económico inmediato. Como existía capacidad ociosa, el BCRA estimó que la expansión por vía del crédito no tendría efectos inflacionarios y permitió que más recursos se volcaran al mercado.

Una novedad importante en la política económica fue la adopción de un régimen de tipo de cambio reptante (“crawling peg”), que contribuyó tanto al mayor dinamismo del sector industrial al favorecer la competitividad de distintas ramas, como a una mejor administración del ciclo monetario, que logró evitar las crisis profundas al moderar el impacto inflacionario y sobre los precios relativos de la devaluación (Diamand 1972). La aplicación del nuevo esquema cambiario -que hacía pequeños y frecuentes ajustes al tipo de cambio nominal siguiendo el crecimiento de los precios- evitó las maxidevaluaciones del pasado y permitió mantener la competitividad externa a pesar de la persistencia del régimen inflacionario.

Unos meses antes de la asunción de Illia, la Secretaría de Agricultura y Ganadería había creado la Comisión Nacional de Promoción Agropecuaria (PROAGRO) con el objetivo de fomentar la implementación de técnicas que pudieran generar una rápida expansión de la producción y la productividad agropecuaria. En su primer año, PROAGRO puso a disposición del BNA 246 millones de pesos para dar créditos para la siembra de praderas permanentes. En junio, se firmó un convenio con el BID que, en conjunto con el BNA, generó una línea especial de financiamiento por 83 millones de dólares (aportados en partes iguales) para impulsar la tecnificación agropecuaria y la industrialización de los productos del campo.⁷ El programa entró en vigor en agosto y la gran

⁶ Luis Polledo ocupó la Presidencia del Banco de mayo a diciembre de 1962. Durante el primer mes de su nombramiento fue designado con funciones de interventor e inició la investigación sobre las actividades realizadas por los Directorios precedentes. El investigador a cargo del proceso fue el contralmirante Lorenzo Arufe (luego presidente de la entidad durante el gobierno de Illia), quien denunció un conjunto de operaciones crediticias, de avales y cambiarias supuestamente fraudulentas realizadas entre el 1/6/1961 y el 8/5/1962. Se puede leer el rechazo de los cargos presentado por el principal acusado, el empresario José Mazar Barnett, en el “Apéndice” de Piola (1967). Este libro hace una cerrada defensa de la labor realizada por el BNA durante la gestión de Mazar en 1961. Su autor fue el abogado Carlos Rodolfo Piola, casado con Silvia Mazar Barnett, hermana del imputado.

⁷ Entre la maquinaria cuya adquisición se podía financiar así se encontraban implementos agrícolas (tractores, arados, rastras, sembradoras, cosechadoras, segadoras), para la producción pecuaria (picadoras de forraje, segadoras de pasto, empacadoras de heno, ensiladoras, desgranadoras, pulverizadoras, esparcadoras de abono), equipos e instalaciones para la industrialización de productos agrícolas (silos de forraje, de granos, ordeñadoras, enfriadoras de leche, descremadoras, batidoras de manteca, deshidratadoras de frutas y de leche, secadoras de granos y clasificadoras de granos y frutas) y, en forma muy especial, procuraba fomentar la adquisición de fertilizantes con efecto residual para incrementar los rendimientos en años posteriores (BNA, 1970: 179).

demanda de fondos llevó a que en diciembre de 1964 se ampliara el contrato, con un nuevo aporte de las dos instituciones: 15 millones de dólares por parte del BID y 73,9 millones adicionales del BNA. Además, se decidió que en cuanto los préstamos comenzaran a ser devueltos, se ofrecerían en las mismas condiciones.

La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo enfrentó diversos contratiempos. Recién en septiembre de 1964 el gobierno presentó un informe preliminar y a fin de año se dieron a conocer los lineamientos generales que orientarían el accionar del período 1965-1969. A partir de requerimientos del Plan, el BNA desplegó varios programas de crédito agropecuario. Las líneas más importantes fueron las de electrificación rural, para la construcción de silos en chacra y elevadores de campaña (canalizados a través de las cooperativas agrarias), que venían desde décadas anteriores y mantuvieron condiciones muy beneficiosas. En 1965 se lanzó el programa para la construcción de silos y elevadores, que contemplaba el financiamiento para aspectos relacionados con la recolección, la conservación, el transporte y la comercialización de granos. Su objetivo era mejorar la productividad, disminuir los costos y mejorar la calidad de las cosechas para su consumo, procesamiento o exportación mediante el reemplazo del anticuado sistema de “embolsado” por el de “a granel”.

También destacó una línea de crédito para la implantación de pasturas. Se definieron tres zonas en las provincias de pastoreo, con el objetivo de no afectar la producción ganadera.⁸ Este programa permitía a los productores acceder a asesoramiento por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promovía la utilización de técnicas agronómicas modernas y suministraba información sobre las especies y mezclas de semillas más eficientes, según las condiciones medioambientales de cada zona. Esta línea permitía financiar hasta el 80% de la compra de semillas y la realización de tareas de labranza. Como en todos los programas, el tipo de interés se fijó por debajo de la inflación (con tasas aún más subsidiadas si eran préstamos aplicados en “zonas de fomento”).

Durante 1965 el Banco abrió una agencia en Brasil, en la ciudad de San Pablo. En estos años desplegó un plan de adopción de sistemas mecanizados para llevar a cabo la contabilización y la estadística de las operaciones realizadas en las distintas sucursales, como asimismo un centro de procesamiento electrónico de datos ubicado en la Casa Central (Ilustración 2). Se contaba allí con dos sistemas electrónicos IBM 1401 y de unidades electromecánicas perforadoras y verificadoras de apoyo; en 1968 se reemplazaron por un nuevo sistema IBM 360, modelo 40, de mayor capacidad operativa, velocidad y adaptabilidad para las tareas de análisis de datos requeridas por la gestión administrativa del Banco.

⁸ La zona A abarcaba las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y la mayor parte de Entre Ríos; la zona B las provincias de San Luis, Chaco, Formosa, el sur de Corrientes y los departamentos entrerrianos de La Paz, San José de Feliciano, Federación y la localidad de Federal; la zona C correspondía a los departamentos del norte correntino y toda la provincia de Misiones. En la primera de ellas era donde se establecieron más limitaciones al programa crediticio.

Ilustración 2: Centro de procesamiento electrónico de datos, Casa Central (vista parcial)



Fuente: BNA (1970), p. 303.

En estos años, a diferencia de lo sucedido al final del gobierno frondizista, la gestión al frente del Banco logró mantener cierta estabilidad (Tabla 5). En 1964 el equipo directivo no tuvo modificaciones respecto al del año previo. Por su parte, quienes fueron nombrados en 1965 bajo la Presidencia del ingeniero agrónomo Saturnino Llorente permanecieron durante tres años seguidos, con el único reemplazo de un director (Pedro Massalin por Isidoro Martínez). Esa permanencia no se verificó en ningún otro periodo bajo análisis en este capítulo.

Tabla 5: Directorio del BNA entre 1963 y 1967

	1962	1963-1964	1965-1967
Presidente	Dr. José Murúa	Cte. Lorenzo J. Arufe	Ing. Agr. Saturnino Llorente
Vicepresidente	Dr. Alejandro E. Frers	Dr. Alfredo Grassi	Dr. Benedicto A. Bianchi
Vicepresidente 2°	Dr. Roberto N. Lobos	Sr. Elbio M. Coelho	Sr. Martin Beloqui
Directores	Sr. José Azumendi Ing. Alberto French Vernet Sr. Enrique García Jaunsaras Sr. Carlos I. M. Gómez Álzaga Sr. Jorge Juri Dr. Carlos Mignaqui Sr. J. Ignacio Smith	Sr. Juan A. Bidonde Sr. Cirilo D. Brown Sr. Alejandro C. G. Giono Sr. Joaquín S. Guevara Civit Sr. Pascual A. F. Le Donne Dr. Mario R. Nosiglia Sr. José Luis Pena	Dr. Alfredo Domingo Borré Lic. Ricardo Alberto Diez Peña Sr. Rogelio Gallarreta Ing. Agr. Pedro Alberto Lacau Sr. Pedro Cándido Massalin (a) Dr. Isidoro Martínez (b) Sr. Constancio Roberto Ripamonti
Gerente General	Sr. Carlos Alberto Couceiro	Sr. Carlos J. Botto	Sr. Mario Solanas Pacheco

Nota (a): director sólo en 1965. Nota (b): ocupó el cargo en 1966 y 1967.

Fuente: elaboración propia sobre Memorias, 1962-1967.

Los resultados macroeconómicos fueron relativamente favorables durante 1964 y 1965, pero en 1966 aparecieron algunos problemas, explicados por la tendencia deficitaria del balance de pagos. Si bien no se desató una crisis como las que habían caracterizado al modelo industrial previamente, la debilidad política del gobierno radical fue la causa de su fin. El peronismo seguía proscrito y tanto los radicales “intransigentes” como los desarrollistas eran fuertes opositores. Parte de los sindicatos, como el gran empresariado y los medios de comunicación, también estaban en contra de Illia. Un análisis posterior del Banco consideraba que en 1966 había operado el mismo factor desencadenante que en 1957/58 y en 1962/63: la “descoordinación” entre la política económica y la social; esto es, que los incrementos salariales y del gasto público habían sido “incoherentes” frente a la política monetaria restrictiva que intentaba contener la presión inflacionaria (BNA, 1970). A finales de junio de 1966 las fuerzas armadas dieron un nuevo golpe de Estado sin encontrar casi reacción.

El Banco de la Nación Argentina durante la “Revolución Argentina”

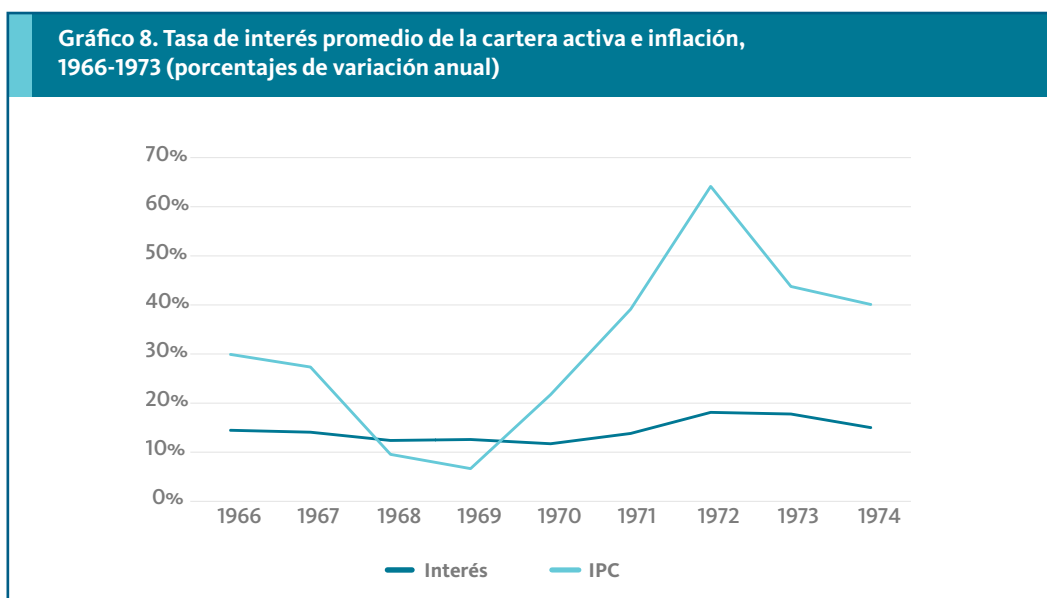
Primera etapa, 1966-1969

Al frente de la autodenominada “Revolución Argentina” quedó el teniente general Juan Carlos Onganía. A diferencia de regímenes militares anteriores, no se planteó como una alternativa de transición política sino de transformación estructural. Los militares propusieron realizar su acción de gobierno en “tres tiempos”: económico, social y político, en ese orden. En primer lugar, se debía ordenar y poner en marcha la macroeconomía. En segundo, se buscaría mejorar la situación social. El tercer y último “tiempo” sería la convocatoria a elecciones para restablecer el gobierno constitucional, pero sin un plazo prefijado para ello.

El 26 de octubre de 1966 el Banco cumplió 75 años y se hicieron varias actividades de conmemoración. El día del aniversario -además de una misa y un acto en la Casa Central- se inauguró el Musco Histórico y Numismático. Por la tarde, en una reunión especial del Directorio participaron el presidente nacional y los ministros de Economía y Trabajo, Jorge Salimei y del Interior, Enrique Martínez Paz. Al terminar, se llevó a cabo el festejo oficial

en el Salón de Actos, con la presencia de los embajadores de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, jefes de las fuerzas armadas, autoridades del gobierno nacional y representantes de los bancos. Luego de los discursos de los directivos, Eduardo Graña, representante de los trabajadores de la institución “comprometió la total dedicación y permanente esfuerzo para que el Banco logre consolidar la grandeza económica y social de la patria”, a tono con el discurso de la época (Memoria 1966: 33).

En marzo de 1967, Krieger Vasena, nuevamente ministro de Economía, puso en práctica un programa de estabilización y reactivación. La concepción de política industrial de Krieger y sus sucesores (José María Dagnino Pastore, Carlos Moyano Llerena y Aldo Ferrer) recogió los principales puntos de consenso del debate económico de la época (Rougier y Odisio, 2017). Por eso, uno de sus objetivos era impulsar la eficiencia industrial. Ello se lograría con el estímulo a las inversiones extranjeras y la concentración económica, a través de incentivos a la exportación y el aliento a la producción local de insumos intermedios y bienes de capital. La venta de manufacturas al exterior fue impulsada por la devaluación, medida que implicó un aumento de la protección efectiva. Aunque la simultánea rebaja de los aranceles a las importaciones, para compensar el efecto sobre los costos industriales y mantener el acicate de la competencia internacional, compensó en parte ese efecto. La “devaluación compensada” equivalió al establecimiento de un doble tipo de cambio. La medida contrariaba los intereses de los productores agropecuarios, cuyas presiones obligaron a una reducción paulatina de las retenciones. Además, se desplegaron varias disposiciones adicionales, pues sólo estrechos segmentos de la estructura industrial eran competitivos internacionalmente. La obtención de créditos del FMI, de la Tesorería de los EEUU y de un conjunto de bancos estadounidenses y europeos, permitió contar con recursos externos para garantizar la nueva paridad cambiaria. En el plano monetario, la “devaluación compensada” permitió moderar la presión inflacionaria, y, por ende, sus impactos recesivos y redistributivos. El BNA redujo las tasas promedio de su cartera activa desde el 14,46% en 1966 hasta un mínimo de 11,73% en 1970. A pesar de la rebaja (Gráfico 8), como la inflación cayó aún más, de manera inédita las tasas resultaron positivas en términos reales en 1968 y 1969.



Fuente: elaboración propia sobre datos de las Memorias y Ferreres (2020).

El programa de Krieger revirtió la amenaza recesiva concitada el año previo. Aunque sin solucionar las contradicciones de fondo del proceso industrializador, el producto bruto aceleró su expansión. Cuando a finales de 1967 se percibieron signos de retroceso en la industria, se adoptaron medidas de intervención expansivas. Se implementó un vasto programa de obra pública, considerando los efectos positivos que tenía sobre la ocupación y la demanda industrial. Aliado a esa política expansiva, el Banco Central autorizó la ampliación de los préstamos personales. Con el doble objetivo de impulsar la producción industrial como de contener la inflación, esta línea canalizó recursos para realizar compras a empresas industriales y comerciales que se hubieran comprometido con el gobierno a no aumentar el precio de sus mercaderías.

En junio de 1968 la Circular B.629 del BCRA puso en vigor nuevos lineamientos para la política crediticia, rebajando requisitos de efectivo mínimo y liberalizando su aplicación a criterio de las entidades bancarias. La única limitación era evitar el otorgamiento de fondos que condujeran a “la formación de existencias especulativas que puedan distorsionar la oferta de bienes destinados al mercado interno o a la exportación”. La expansión de los fondos disponibles aparejó un crecimiento del 42% del crédito bancario destinado a las empresas privadas. Entre los sectores beneficiados por las liberaciones adicionales de encaje se halló el crédito personal para el consumo (que reincorporó la financiación de automotores, suspendidas desde los años de Frondizi), como asimismo la promoción de exportaciones “no tradicionales” y las ventas a plazo de maquinaria y equipos a organismos públicos.

En noviembre, se anunció que la moneda nacional podía ser utilizada en los giros contra el FMI y el organismo pactó dos préstamos stand-by –con Inglaterra y la India– en pesos argentinos, gracias al ingreso del país al grupo de miembros con moneda convertible. Por otra parte, en la Asamblea del Fondo de 1969, presidida justamente por la Argentina, se decidió poner en marcha el sistema de Derechos Especiales de Giro (DEG) aprobado dos años antes.⁹ Su activación a partir del primero de enero de 1970 brindó liquidez a más de cien países.

En ese contexto, la economía nacional mostró cierto dinamismo en el proceso de cambio estructural con la aparición de secuencias virtuosas de crecimiento, progreso técnico y mejora de productividad en distintas ramas industriales. El sector manufacturero incrementó su participación en el producto bruto, impulsado por las industrias metalúrgicas, químicas y de bienes de capital, y aumentaron tanto la inversión en maquinaria y equipos como la exportación de manufacturas. Sin embargo, las fuentes estructurales de desequilibrios no habían desaparecido. La desvalorización monetaria por una inflación persistente llevó a las autoridades a poner en circulación, a partir de enero de 1970, al peso Ley 18.188, signo monetario que reemplazó con paridad 1:100 al peso moneda nacional, en vigencia desde 1881.

El año 1969 estableció un punto de inflexión. Luego de una rápida expansión, la etapa posterior se caracterizó por un menor crecimiento y una inflación más elevada, a la vez que reaparecieron tensiones externas. De todos modos, las claves de la dinámica social fueron no tanto las vicisitudes de la economía, como la pugna política. El país se vio signado por una creciente conflictividad, cuya máxima expresión fue el surgimiento del sindicalismo clasista de base y los movimientos guerrilleros. Los levantamientos de obreros y estudiantes en Córdoba en mayo de 1969 terminaron con el mandato de Krieger (reemplazado por Dagnino Pastore), mientras que el asesinato de Pedro Aramburu (presidente de facto entre 1955 y 1958) por parte de Montoneros en junio del año siguiente terminó con la Presidencia de Onganía.

⁹ Los DEG son activos de reserva internacional, creados por el FMI con el objetivo de reemplazar al oro y al dólar en las transacciones internacionales y son utilizados como moneda de cuenta por organismos financieros internacionales.

El BNA se adecuó a los cambios y lineamientos impulsados durante la gestión Krieger. En respuesta a los problemas para colocar las exportaciones de carne en el tradicional mercado europeo, a partir de 1967 se brindó apoyo extraordinario a los productores ganaderos, sin desmedro de los programas preexistentes de crédito rural. También el “Programa de Tecnificación Agraria” se sostuvo con apoyo del BID. En adición, y dando cuenta del cambio en la orientación económica, el Directorio señaló la necesidad de fortalecer el “proceso de progreso y modernización en que está empeñado el país”. El caso más evidente fue la rebaja del 12 al 8% anual en las tasas para el financiamiento de exportaciones “no tradicionales”, como asimismo el incremento en los préstamos para firmas manufactureras exportadoras. Al mismo tiempo, se dictaminó que en caso de abrirse nuevas agencias del BNA en el extranjero, debían contar con espacios especiales para realizar muestras de productos argentinos con miras a propiciar su exportación.¹⁰ En 1969, siguiendo directivas del gobierno nacional, se planteó la necesidad de multiplicar la promoción de las exportaciones nacionales y se trazó un programa para crear nuevas delegaciones del Banco en países de la ALALC, Estados Unidos y Europa, utilizando la red de banqueros corresponsales de la institución.

A pesar del discurso industrializador, el 60% de la cartera crediticia del Banco siguió asignada a las necesidades financieras de los productores agropecuarios o a la industrialización y comercio de sus productos.¹¹ Durante 1967 se establecieron 25 regímenes de crédito subsidiado para la incorporación de bienes de capital en la actividad agropecuaria. En términos de su distribución regional, ese año cayeron los créditos otorgados por el Banco en Tucumán y Chaco, dado que las necesidades financieras de los ingenios azucareros y de los productores de algodón fueron mayormente atendidas por los respectivos bancos provinciales.

Al mismo tiempo, en lo que parecía ser un tiro por elevación al rumbo mantenido durante el gobierno desarrollista, se señalaba que era necesario adoptar una actitud más amplia para lograr la verdadera tecnificación del campo. Más allá del otorgamiento de fondos para las inversiones en activo fijo (como la incorporación de mejoras, maquinarias, tractores e implementos agrícolas, el sembrado de pasturas perennes, la compra de hacienda reproductora y de predios rurales o la construcción de silos y elevadores), se debía avanzar más integralmente:

[Se] puso especial énfasis en el estímulo de las inversiones en formación de capital, destinadas a tecnificar el campo, pero entendiendo que tal objetivo no se alcanza por la sola vía de la mecanización sino, esencialmente, mediante el asesoramiento especializado que haga posible el ejercicio de prácticas racionales de aprovechamiento de los recursos humanos, de la naturaleza y del capital. Este concepto se ha puesto en práctica [...] en varios órdenes que hacen a la acción del Organismo, en todos los cuales se insta al productor para que abandone prácticas rutinarias que deben superarse (Memoria 1967: 10).

También en 1967 inició sus funciones la primera “Junta Coordinadora de Acción Bancaria” con el Banco de la Provincia de Formosa. Al año siguiente se estableció otra junta con la provincia de Entre Ríos. Al mismo tiempo, se acentuó la política de regionalización inscrita en el programa de desarrollo nacional. En 1968 se puso en marcha un “Plan de Desarrollo Agrícola Ganadero de la Provincia de La Rioja” para impulsar sus producciones típicas, como la nogalicultura, olivicultura, vitivinicultura y frutihorticultura y el fomento ganadero, en especial

¹⁰ En 1968 el BNA se realizó su primera muestra comercial e industrial de productos argentinos en la agencia de Asunción.

¹¹ En BNA (1970: 249-250) se puede encontrar un resumen de las actividades que recibían créditos industriales, comerciales, de construcción y servicios, que tenían estrecha vinculación con la transformación y la comercialización de los productos agropecuarios.

bovino. A finales de año el Banco se comprometió a adoptar un programa crediticio especial en sustento del “Plan de Desarrollo Patagónico” (que abarcaba a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e islas del Atlántico Sur). Por su intermedio, se flexibilizaron los requisitos para el otorgamiento de préstamos en la región y se redujeron las tasas de interés, con el objetivo de fomentar las actividades agropecuarias y el crecimiento demográfico. En 1969 el BNA con el BIRA y los bancos provinciales de Chubut y Santa Cruz conformaron una “Junta Coordinadora de la Acción Bancaria de la Patagonia”. Las juntas pretendían incrementar la coordinación entre instituciones bancarias y evitar la duplicidad de los programas de financiamiento.

El Banco desplegó un “Fondo de Integración Territorial”, destinado a financiar inversiones de obra pública en las provincias de menor desarrollo relativo. Solo en 1969 se aplicaron por medio de este programa 40.000 millones de pesos a obras de riego, vialidad y colonización. Entre los principales destinos se ubicaron el “Programa de Desarrollo Integral del Valle de Catamarca” y la colonización del Dique Las Pirquitas; en Tucumán, una red de riego en El Cadillal y; el fomento a la colonización y rehabilitación de tierras linderas al río Dulce en Santiago del Estero. También se financiaron obras viales de relevancia en el Noreste (ruta provincial nº 17 en Misiones), para la provisión de agua potable en Río Gallegos y trabajos de aprovechamiento del Río Colorado en La Pampa. Ese año el BNA fue el agente colocador de la suscripción pública de la tercera serie de “Bonos Nacionales para Obras Públicas - Fondo Nacional de Inversiones” captando 901 millones de pesos. Aunque los datos disponibles no permiten discriminar el valor aprobado para los contratistas públicos dentro de los créditos destinados a construcciones, en varias ocasiones el Directorio señaló el relevante aporte del Banco en este sentido.

Además, se suscribió un convenio con el CONADE para establecer un “Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión”, mediante el cual el Banco actuaba como agente administrador de los fondos destinados a realizar estudios técnicos de factibilidad y de preinversión en el sector agropecuario. También desde el BNA se hacía un seguimiento de los resultados obtenidos en explotaciones agropecuarias piloto del INTA y la Comisión Nacional de Promoción Agropecuaria, como también de las experiencias obtenidas por los grupos CREA (Consortios Regionales de Experimentación Agrícola) y otras entidades científicas y agro técnicas del país en sus ensayos experimentales.

En esta línea, durante 1967 se comenzaron a delinear dos importantes proyectos: un nuevo programa de electrificación rural con el fin de elevar las condiciones de vida rural (y ayudar a frenar el éxodo poblacional) y la eficiencia de las empresas agropecuarias, y el “Proyecto Balcarce de Desarrollo Ganadero”, para promover la mejora de la productividad de las explotaciones bovinas en los campos de la provincia de Buenos Aires. El primero se definió en 1968 y al año siguiente se otorgaron los primeros préstamos para realizar obras de distribución de electricidad bajo normas definidas por la Dirección Nacional de Energía Eléctrica (DNEE). El BNA aportó en conjunto con la Secretaría de Estado de Energía y Minería 15 millones de dólares, y el BID proveyó un monto equivalente. El programa estuvo en vigencia hasta 1973; en ese lapso disparó inversiones por 51,6 millones de dólares a través de cooperativas eléctricas que beneficiaron a 18.600 productores rurales. Mediante la instalación de 10.250 kilómetros de líneas trifásicas y otras 22.000 de mono y bifásicas, se abarcó una superficie de casi 5 millones de hectáreas. En el plazo otorgado se aprobaron 92 préstamos, de los cuales 76 se pudieron financiar con el presupuesto original. Los 16 faltantes se cubrieron con recursos adicionales del BNA y la DNEE (imputados provisoriamente a otro crédito del BID, que se firmó en 1975).

El segundo programa involucró un financiamiento total de 24,4 millones de dólares para productores y contratistas rurales, de los cuales 15,3 millones fueron provistos por el BIRF. Esos recursos se pusieron a disposición del BCRA, que celebró un contrato de préstamo subsidiario con el BNA. Tras su firma, la institución quedó a

cargo de la gestión operativa y financiera del plan, para lo cual coordinó su accionar con el INTA (encargado de los aspectos técnicos) y con el CONADE, que debía evaluar las posibilidades de venta de la carne vacuna. El “Proyecto Balcarce” procuraba generar una inversión global de 35 millones de dólares en un plazo de tres años. El programa inició en agosto de 1968 en 12 localidades, a los que se sumaron igual cantidad un año más tarde y otros tantos en 1970, para abarcar un total de 36 partidos del centro, este y sur bonaerense. Se preveía sembrar praderas mejoradas en 220.000 hectáreas para poder producir 130.000 toneladas vivas de novillos al alcanzar su terminación para faena.

En otro ámbito, el 29 de abril de 1967 la reglamentación de la Ley 17.253 derogó las medidas de emergencia sobre arrendamientos y aparcerías rurales dictadas en 1958, que a su vez habían prorrogado los contratos congelados en 1943 durante el gobierno de Ramírez. A partir de 1967 el régimen legal del arrendamiento quedó regido por las disposiciones del Código Civil. La Ley establecía que los bancos oficiales podían financiar con crédito hipotecario hasta el 60% del monto de la operación de compraventa de las tierras por parte de los productores que las ocupaban. Los compradores debían aportar el 10% del valor mientras que dueños de las tierras podían ofrecer financiamiento por el 30% restante. El régimen comenzó a operar en agosto, y solo en los tres últimos meses del año el BNA acordó préstamos para la adquisición de 6.435 hectáreas en total. El artículo 16 de la misma Ley instruyó al Banco a transferir en un plazo de noventa días las veintiséis colonias agrícolas que aún mantenía en su poder, como asimismo a ceder en favor del Consejo Agrario Nacional la administración de las tierras de colonización (con sus bienes y créditos pendientes) obtenidas bajo la Ley 12.355 de 1937.¹²

En 1969 se desplegaron nuevos programas específicos. Estos incluyeron el otorgamiento de préstamos personales para turismo, la consideración de ocupantes de tierras fiscales como sujetos de crédito para la construcción, refacción y acondicionamiento de viviendas rurales, financiamiento especial para la elaboración de mosto concentrado, préstamos a productores agropecuarios que quisieran integrar acciones de Sociedades Anónimas enfocadas en el procesamiento de la producción primaria, asistencia a productores de mandioca, alpiste y para la modernización de la producción de maíz. En abril, la Ley 18.191 permitió al Banco comenzar a otorgar crédito no solo para gastos de evolución sino para inversiones en activo fijo de actividades comerciales y de servicios (lo que tenía vedado por el artículo 4° de su Carta Orgánica).¹³

Durante todo el período el BNA auspició y organizó seminarios y encuentros de especialistas y empresarios sobre comercio exterior, por su propia cuenta o en conjunto con otras instituciones públicas y privadas. El Directorio consideraba que estaba “contribuyendo positivamente a la formación de una conciencia nacional exportadora, en directo beneficio de los intereses generales del país” (Memoria 1969: 5). De manera innegable, durante los siguientes años las exportaciones de origen industrial pasaron a representar una proporción significativa del total exportado. En línea con esa orientación de la política económica, el Banco continuó ampliando los programas de apoyo a las industrias exportadoras. El perceptible crecimiento de las exportaciones manufactureras permitía vislumbrar la superación -al menos parcial- de la dependencia respecto al sector primario para la generación de divisas y la moderación de la dinámica cíclica del stop and go (Odisio y Rougier, 2019).

¹² Originalmente esa ley había autorizado a la Junta Reguladora de Vinos a adquirir tierras para impulsar la producción de uva vinífera.

¹³ Una enumeración no exhaustiva de las actividades comprendidas en este rubro abarcaba “empresas de transporte automotor de pasajeros y carga, adquisición de aeronaves, establecimientos de enseñanza privada, servicios médicos y sanatorios privados, profesiones liberales, etc.” (Memoria 1972: 38).

Para garantizar el correcto uso de los modernos sistemas electrónicos de gestión, se estableció en 1969 el Instituto de Capacitación para el Personal del BNA. Su accionar se adicionó a un programa preexistente de becas, que permitía a las personas empleadas realizar estudios en disciplinas vinculadas a la organización y administración bancaria en el país y el extranjero. Algunas de las instituciones que brindaban estos cursos eran IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), Forex Club Argentino, Universidad Provincial de Mar del Plata, Universidad Nacional del Sur, Ministerio de Defensa, Banco do Brasil y Banco do Nordeste do Brasil, Federación Americana de Abogados y el BID. La Universidad Católica Argentina ofrecía cursos especiales de tres años de duración. Un convenio especial se firmó con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) tras su fundación en 1968, para que trabajadores del Banco pudieran acceder a los cursos de especialización que esta organización ofrecía en su sede central, en Lima. En todos los casos, el proceso de selección era por concurso. Asimismo, se tenía la política de incorporar material de estudio a la biblioteca ubicada en la Casa Central, como a las bibliotecas que existían en las sucursales asienta de las Inspecciones de Zona.

Segunda etapa, 1970-1973

La Junta de Comandantes, encabezada por el general Agustín Lanusse, se debatía entre la profundización de la “revolución” o la rehabilitación democrática terminando con la larga proscripción del peronismo. Sin embargo, en el terreno económico había un claro diagnóstico: era necesario un cambio de rumbo que marcara distancia con el “eficientismo” y el apoyo a los sectores financieros de la época de Krieger. Se debía avanzar con un “verdadero proyecto nacional”, en contraposición a lo que se percibía como la extranjerización afianzada durante el onganato. Para Lanusse era indispensable acelerar la salida política de los militares y, en el trayecto, atender los extendidos reclamos en favor de una política económica de contenidos productivistas y redistributivos. En ese marco, se designó como presidente al general Roberto Levingston el 18 de junio de 1970. Una vez instalado, el nuevo gobierno buscó el apoyo de los sectores previamente desplazados: los empresarios nacionales de la CGE y los sindicatos “participacionistas” vinculados a la CGT. En esas circunstancias, la política económica ganó algunos grados de autonomía y giró hacia el nacionalismo, buscando otra base de sustentación frente a una situación política y social cada vez más explosiva.

En esta etapa la configuración macroeconómica se deterioró progresivamente, con una aceleración inflacionaria y un déficit creciente del balance de pagos y del resultado fiscal. Parte de ese desequilibrio reflejaba el impacto del proceso inflacionario sobre las tributaciones vencidas y el rezago de los ajustes en las tarifas de los servicios públicos. A medida que empeoraba la posición financiera de las empresas estatales, pasaron a depender en medida creciente de las transferencias de la Tesorería. El crecimiento del desequilibrio financiero fue acompañado, en consecuencia, por una creciente participación del financiamiento oficial a través de créditos del BCRA.

Frente a estos problemas, se intentaron una sucesión de planes de estabilización que tomaban las lecciones del pasado e incorporaban algunos elementos novedosos. Primero Moyano Llerena, quien tomó el lugar del renunciante Dagnino Pastore en junio de 1970, intentó reeditar el programa de estabilización de Krieger a menor escala y devaluó la paridad que se había mantenido desde 1967. Además de las presiones cambiarias, la suba de los precios internacionales de la carne gatilló tensiones acumuladas durante los años previos; luego de un período de liquidación de stocks, y ante la rigidez de la oferta vacuna, los precios se dispararon y arrastraron a los demás, haciendo fracasar el plan. A finales de octubre Moyano fue reemplazado por Ferrer, que venía de desplegar una vigorosa política de impulso a la infraestructura básica desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Este economista proponía profundizar el rumbo nacionalista basado en el “modelo integrado y abierto”, que había desarrollado conceptualmente en sus estudios previos (Rougier y Odisio, 2012).

La nueva política económica otorgó un papel más protagónico al Estado para promover el desarrollo de la industria pesada y la operación de empresas de energía, comunicaciones, transportes y producción metalúrgica, siendo consistentes con los planteos que Ferrer venía enunciando desde mucho tiempo atrás (Rougier, 2022). Aun cuando la coyuntura dominó el escenario, la política económica se orientó hacia el “desarrollismo nacionalista” en pos de una mayor integración y la promoción de las exportaciones industriales. Esas definiciones, que no eran más que objetivos generales, se combinaron con políticas de corto plazo que terminaron condicionando las de largo aliento. En principio, la estabilidad como eslogan fue abandonada por Ferrer. La política de gastos y la oferta monetaria se hicieron más expansivas, se introdujeron controles a la salida de capitales, se pagaron deudas atrasadas con proveedores del Estado y se refrendaron incrementos salariales.

Para facilitar el financiamiento de las empresas de capital extranjero, durante la gestión Krieger se había mejorado la operatoria de los pasajes de cambio y se introdujeron seguros de cambio sobre los préstamos en divisas. Con la llegada de Ferrer se revirtió la orientación. En diciembre de 1970 el BCRA limitó la expansión del crédito que se podía otorgar a las empresas extranjeras. En febrero, se adoptaron numerosas medidas sobre el mercado financiero. Se liberaron los tipos de interés para las colocaciones del público a fin de estimular la captación del ahorro y se fijó un nuevo régimen de depósitos también con tasa liberada que, estableciendo una permanencia mínima de un año, buscaba generar recursos para un sistema de crédito a mediano plazo. Los bancos debían orientar al menos la mitad de los fondos recibidos a la inversión en bienes de uso de producción nacional. Se introdujeron nuevas normas sobre el mercado de préstamos hipotecarios, se creó un fondo de garantía de los depósitos y se procedió al reordenamiento del mercado de aceptaciones.

Se adoptaron al mismo tiempo controles de precios en productos clave y artículos de consumo masivo, se aplicó un impuesto sobre el precio de venta de la hacienda en pie y se establecieron vedas al consumo de carne vacuna. No obstante, a principios de 1971 la inflación contaría con tres motores autónomos: el efecto residual de la devaluación de Moyano, el irresuelto problema de la carne y los incrementos salariales. La tendencia al deterioro económico se mantuvo durante todo el período, y aunque no se llegó a producir una crisis profunda, la posibilidad de resolución de los problemas económicos quedó diezmada por la incontenible disputa social, que iba limitando cada vez más el margen de acción (Fiszbein, Odisio y Rougier, 2022).

La cuenta corriente de la balanza de pagos era deficitaria desde 1968 pero en 1971, por primera vez desde 1963, el intercambio de mercancías con el exterior también arrojó saldo negativo, motivado por el aumento del valor de las importaciones de bienes industriales y combustibles. La evolución adversa de los términos del intercambio, como las prácticas proteccionistas del mundo desarrollado, conllevaron dificultades para la colocación de los productos tradicionales de exportación. Las salidas de capital -motivadas por la desconfianza en el nivel del tipo de cambio y un diferencial negativo de tasas de interés-, ocasionaron la disminución de las reservas internacionales, que se redujeron a menos de la mitad del stock acumulado a fines del año anterior.

La situación internacional daba claras señales de estar transitando el fin de una época. Desde finales de los sesenta el crecimiento económico del mundo desarrollado comenzó a desacelerarse. La tendencia hacia la baja del desempleo y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales habían incrementado el costo de la fuerza de trabajo por encima de los crecimientos de productividad. Se sumó una tendencia ascendente en los precios de los insumos básicos que erosionó la rentabilidad empresarial. El resultado fue la aceleración de la inflación global, cuya dinámica pasó de responder al empuje de la demanda al de las tensiones ocasionadas por los costos crecientes. Además, los capitales que las multinacionales europeas destinaron a la valorización

financiera contribuyeron, junto a la operatoria de los bancos norteamericanos, a expandir aceleradamente la oferta monetaria mundial.

Para mayo de 1971, la crisis internacional se hizo evidente con cierre de mercados, aguda fluctuación de monedas y alza de tasas de interés. En agosto se devaluó el dólar, con la consiguiente revaluación de las monedas europeas y el oro. El sistema internacional adoptado en 1944 dejó de funcionar cuando la Reserva Federal suspendió el cambio de dólares por oro, lo que condujo en 1973 al abandono de las paridades fijas del sistema de Bretton Woods y dio lugar a tipos de cambio flexibles contra el dólar. La gran volatilidad internacional agregó nuevo impulso a la circulación de capitales con alto grado de liquidez. El nuevo régimen monetario internacional y las orientaciones geopolíticas de las potencias dominantes tendrían incidencia fundamental en la restricción externa de la periferia y en el espacio disponible para tener para sostener el crecimiento.

El aumento en el precio del petróleo dispuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a fines de 1973 consolidó el alza en los costos de las materias primas, poniendo fin a la disponibilidad de commodities baratas que había permitido obtener altas rentabilidades por décadas. Además de agudizar las presiones inflacionarias, generó un formidable incremento de las rentas petroleras. Los “petrodólares” realimentaron las transformaciones de los mercados internacionales de capital. Las tentativas de revertir la tendencia recesiva en los países desarrollados por medio del gasto público y la expansión monetaria agudizaron el proceso inflacionario mundial, que se salió de control con el shock petrolero. El encarecimiento de las materias primas forzó a la mayoría de los países a priorizar, además de la reactivación económica, el equilibrio de los balances de pagos, retrayendo los flujos de comercio internacional. Estados Unidos implementó una política cambiaria y monetaria expansiva, que le permitió superar los problemas de abastecimiento energético. Con todo, las restricciones al crecimiento no podían ya ser aliviadas dentro del patrón tecnológico e institucional de posguerra, que había dejado atrás su etapa más fértil. La estanflación (estancamiento con inflación) apareció como fenómeno novedoso, con implicancias inquietantes para el keynesianismo que había guiado la política económica de los países centrales y que sería burdamente atropellado por el pujante monetarismo.

La crisis incrementó los obstáculos económicos para la periferia. A diferencia de los países industrializados, tenían poco margen de acción para equilibrar el balance de pagos (Ferrer, 1975). Con todo, algunas economías semi-industrializadas superaron las tasas de crecimiento de las centrales. La expansión más acelerada se registró en donde avanzó el proceso de industrialización y se aceleró la exportación de manufacturas, como Corea del Sur y Brasil. Otros países -Argentina entre ellos- iniciarían un nuevo período histórico caracterizado por la amplificación del rezago productivo y tecnológico, dejando atrás el momento de mayor potencialidad en su devenir industrial (Odisio y Rougier, 2022).

Con el quiebre de la paridad oro-dólar en 1971, dos tercios del comercio exterior argentino pasó a realizarse con países con una paridad más baja y, si bien la revaluación implicaba una mejora en la cotización de las reservas, su efecto no alcanzó a compensar el déficit externo. Frente a la sangría de divisas, se implementaron distintas medidas para fomentar las exportaciones, controlar las importaciones (sobre todo las de artículos “prescindibles”) y se intervino el mercado de cambios para proteger las reservas acumuladas (Rougier y Odisio, 2018). A pesar de las dificultades, se evitó la recesión gracias a la inversión pública, la acumulación de existencias ganaderas y el crecimiento de las exportaciones manufactureras. En el plano político, tras un “segundo Cordobazo”, en marzo de 1971 Lanusse se ubicó como el último presidente de la “Revolución Argentina”. Poco después, se

disolvió el Ministerio de Economía con el propósito de bajar su perfil. El centro de las decisiones pasó al Ministerio de Hacienda y Finanzas, que no pudo definir un rumbo claro más allá de los intentos de adoptar medidas de restricción monetaria y fiscal. A finales de año el BCRA dispuso un aumento sustancial de las tasas pasivas, lo que generó un gran crecimiento de los depósitos a plazo fijo.

Durante 1972 la aceleración inflacionaria contrarrestó los tres aumentos de salarios otorgados en enero, mayo y octubre, poniendo a los sindicatos a la defensiva. El empeoramiento de la situación económica y la fuerte iliquidez restaron también el apoyo empresario. Con el régimen militar a la deriva, la acción económica se tornó completamente ecléctica, con una considerable ampliación del gasto público, incrementos salariales y la expansión del crédito, que contrastaron con la política restrictiva insinuada inicialmente. Sin embargo, tras muchos meses turbulentos, el cambio en la coyuntura permitió augurar un desenvolvimiento económico futuro más favorable. Las reservas internacionales se incrementaron gracias al ingreso de capitales, la revaluación de las monedas extranjeras y la asignación de mayores DEG. También auxilió una notable mejora en los términos del intercambio, especialmente durante los últimos meses del año, y perspectivas positivas del ciclo agropecuario en curso. El monto de exportaciones superó los 1.940 millones de dólares, el nivel más elevado hasta entonces alcanzado.

El BNA respondió a los cambios de la política económica. En diciembre de 1970, la Ley 18.848 restituyó al Banco la plenitud de sus facultades presupuestarias conferidas en la Carta Orgánica de 1957 y que habían sido suspendidas por la Ley 14.794 de “Racionalización Administrativa” dos años más tarde. A partir de entonces, pudo fijar autónomamente su presupuesto de sueldos y gastos, que debía solamente ser informado al Poder Ejecutivo. Por otra parte, las tasas de interés de la cartera activa resultaron crecientemente negativas en términos reales, dada la aceleración de la inflación (Gráfico 8). En la segunda mitad de 1970, y en línea con la política económica de Ferrer, se buscó brindar mayor asistencia a las pequeñas y medianas empresas industriales de capital nacional.

Además de los programas ya mencionados, durante el año el BNA desplegó un plan financiero especial en respuesta al “Plan de Desarrollo Integrado del Río Colorado”. Los préstamos contemplaban asistencia técnica integral para lograr la transformación productiva de la región, castigada por la pérdida de cosechas en los años previos. Se contaba con la colaboración de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) y del INTA. Con similar intención, el Banco otorgó condiciones de excepción en créditos para productores de algodón, maní, soja y sorgo en Tucumán en 1970 y 1971. Eran razones sociales las que impulsaban la aplicación de este “Plan de Transformación Agroindustrial” de la economía tucumana. En 1971 se agregaron programas para el desarrollo agropecuario de San Luis y la reactivación de San Juan; al año siguiente, se firmaron convenios con las provincias de La Pampa (desarrollo de la Colonia 25 de Mayo), Catamarca (plan regional), Salta y Jujuy (plan ganadero), Río Negro y Formosa (mensuras rurales), Chaco (plan lechero), Salta y Tucumán (fomento de los Valles Calchaquíes), Chubut (combate de minifundios) y Corrientes (contra el minifundio y para favorecer a la cuenca tabacalera de Goya). También en 1972 se extendieron las condiciones crediticias del plan de desarrollo patagónico a las zonas de frontera internacional, en respuesta a lo indicado por la Ley 18.575 sancionada dos años antes para la integración de esas áreas.

El Banco continuó brindando financiamiento extraordinario y subsidiado a las provincias que presentaban motivos de emergencia o promocionales. En 1972 se fortaleció el Departamento Agronómico de la Gerencia de Crédito Agrario, para contar con un mayor número de profesionales que impulsaran la modernización de las

explotaciones primarias. Unos 340 vocales participaban en los 35 “Consejos Zonales” del BNA, que replicaban las “Áreas de desarrollo” del CONADE. Con todo, los recursos financieros recibidos y aplicados por zona reflejaban la realidad de un país urbano e industrial. Más allá de los objetivos de la política de desarrollo regional, en un distintivo primer lugar se ubicaba el área metropolitana, seguida de la región pampeana; más atrás, con diferencia, las otras zonas. El primer agrupamiento era el único que recibía menos préstamos que el nivel de depósitos que concentraba; es decir que la ciudad de Buenos Aires y su conurbano realizaban transferencias netas de recursos hacia el resto del país. En 1973 la región patagónica mostró la misma dinámica (por cada 100 pesos depositados allí, los préstamos representaron solo 66), lo que obedeció a la obtención de precios de la lana excepcionalmente altos ese año.

En colaboración con los objetivos fiscales, en 1970 el Banco incorporó a su cartera “Bonos Nacionales de Obras Públicas - Fondo Nacional de Inversiones” de la 5° y 6° serie, por un total de 78 millones de pesos. Además, colocó entre su clientela títulos por más 10 millones. En diciembre de 1971 el BNA comenzó a operar en el mercado de aceptaciones bancarias y rápidamente se transformó en el principal operador de la plaza, jugando un papel regulador sobre las tasas y plazos vigentes. En apoyo del programa de obras públicas, tuvieron enorme expansión porcentual los préstamos otorgados a “Electricidad y Gas” en 1972. Destinados en parte importante al financiamiento de empresas estatales y cooperativas, el monto global destinado a esta actividad se multiplicó por 10.

En referencia al sector agropecuario, en agosto de 1971 el Banco puso en ejecución un “Programa de Crédito Agrícola Orientado”, acordado con el BID dos años antes. Para el Banco Interamericano era una experiencia piloto de crédito orientado y servicios técnicos de extensión con vistas a evaluar su posible replicación en otros países. Su aporte, con el del BNA y de los productores alcanzados se estimaba en 42 millones de dólares. Los beneficiarios eran pequeños y medianos productores rurales ubicados en zonas seleccionadas bajo un doble criterio: por su mayor aptitud agrícola potencial y su menor desarrollo económico relativo. Los proyectos financiados debían desarrollarse sobre la base de “modelos tipo” elaborados por el INTA en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, La Pampa y los departamentos de General Obligado, Nueve de Julio y Vera en Santa Fe. El mismo año se recibió además un tercer aporte del BID para el programa de “Tecnificación Agraria” por 8 millones de dólares adicionales, llevando el total contribuido por esa institución a 48 millones. En sus ocho años en funcionamiento, el BNA había comprometido al programa recursos equivalentes a 107 millones de dólares. En mayo se puso en marcha un “Programa de almacenamiento de granos”, con coparticipación financiera de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los EEUU y del Banco, que aportaron 20 millones de dólares en partes iguales para promover la instalación de plantas de silos y/o elevadores de campaña y sus elementos complementarios (secadoras de granos, equipos de desinfección, etcétera). El objetivo era mejorar el acopio y transporte de las cosechas hacia los puertos y resultaba complementario al programa previo de silos en chacra del BNA. Una de las principales instituciones beneficiarias del nuevo plan fue la Junta Nacional de Granos, que recibió financiamiento para construir seis elevadores en Coronel Granadá (Buenos Aires), Huinca Renancó (Córdoba), Hasemkamp (Entre Ríos), Santo Tomé (Corrientes), Tostado (Santa Fe) y Fernández (Santiago del Estero). En adición, Ferrocarriles Argentinos cedió gratuitamente terrenos para que la Junta construyera nuevos silos y elevadores de campaña. A mediados de 1974 se agotaron los fondos externos pero el BNA sostuvo la expansión del programa con recursos propios.

En 1971 mostraron gran crecimiento los saldos de los préstamos no agropecuarios (66% nominal), que resultó explicado por tres factores fundamentales: la expansión de los préstamos personales, la mayor asistencia para las exportaciones de productos manufactureros y la incidencia de créditos extraordinarios otorgados a firmas industriales bajo el programa de 1968 para el financiamiento de las ventas a plazo efectuadas a empresas estatales. En los restantes años la expansión de la cartera fue más equilibrada entre receptores agropecuarios y los industriales y de servicios (Gráfico 4).

Dada la “enérgica vitalidad” con que el BNA desplegaba programas de asistencia a la exportación, el Directorio consideraba que “la institución asume el rango de banca nacional del comercio exterior” (Memoria 1971: 4). En 1972 se creó la Subgerencia General de Comercio Exterior como una dependencia autónoma dentro del Banco. El BNA aportaba el 60% de los recursos volcados por todo el sistema bancario en el “régimen especial, en condiciones muy favorables” que el BCRA había desplegado para el fomento de las exportaciones industriales (Memoria 1972: 49). El mismo año, la Organización de Estados Americanos (OEA) otorgó una distinción a la institución por las labores realizadas en ese plano.

En paralelo, como derivación de lo aprobado en las sesiones del Directorio del 5 de mayo y el 21 de agosto de 1969, se buscó expandir el Banco hacia el exterior. A finales de ese año se instó a terminar las gestiones iniciadas, pero nunca culminadas, para inaugurar oficinas en Lima y en Santiago de Chile. Además, se planteó la conveniencia de contar con sucursales en Nueva York, Frankfurt, Roma, Bogotá, México DF y Caracas. En la reunión del Directorio del 22 de diciembre de 1971 se incorporaron al listado Londres, Madrid o Barcelona, Hong Kong, Tokio y Rand o Johannesburgo. Ante el poco avance de estos propósitos, en 1972 el presidente y el vicepresidente de la institución realizaron gestiones para su reactivación, considerando además la posibilidad de abrir sucursales en París y Hamburgo. El renovado impulso permitió finalmente la instalación de oficinas de representación en Nueva York, Lima, Madrid y Santiago ese año.

A pesar de la creciente pérdida de consenso social y capacidad de acción política durante la segunda etapa del gobierno militar, merece destacarse que -funcionando casi en contra de ese contexto- el Directorio del Banco alcanzó relativa constancia (Tabla 6). Si durante el período de Onganía los cargos de administración directiva fueron modificados prácticamente cada año, llamativamente entre mediados de 1971 y de 1973 no hubo mayores cambios en el BNA bajo la Presidencia de Mario Raúl Nosiglia. Más aun, cinco de los seis directores que trabajaron en esa gestión (Enrique Cao, José Luis Casas, Roberto Eguilior, Horacio Giberti y Gerardo Myburg) habían sido nombrados en 1970 por la gestión anterior. En adición, entre 1965 y 1969 Walter Bernardo Stegmayer ocupó la Gerencia General, siendo luego sucedido por Carlos Alfredo Navone entre 1970 y 1975. De tal modo, más allá de los cambios políticos e incluso a nivel de la cúpula de la propia institución, los cuadros técnicos del Banco parecieron gozar de un funcionamiento relativamente más firme en esos años.

Tabla 6: Directorio del BNA entre 1968 y 1973

	1968	1969	1970	1971 a agosto 1973
Presidente	Dr. Mario Martínez Casas	Sr. Enrique S. Gilardi Novaro	Dr. Jorge Bermúdez Empananza	Dr. Mario Raúl Nosiglia
Vicepresidente	Dr. Ciro Luis Echsortu	-	Dr. Juan Francisco de Larrechea	Dr. Juan Francisco de Larrechea
Vicepresidente 2°	Sr. Martín Beloqui	Sr. Roberto Eguilior	Sr. Mario Gastón Tobías	Sr. Juan Severo Tártara
Directores	Sr. Alfredo Manuel Cousido Sr. Francisco Díaz Telli Sr. Roberto Eguilior Ing. Ricardo Marcial Escudero Gorriti Ing. Agr. Alberto French Vernet Ing. Agr. Jorge J. Giménez Dixon Agr. Roberto Sahade	Sr. Alejo Bande Dr. Enrique Guillermo Cao Sr. Francisco Díaz Telli Dr. José I. García Flores Dr. Carlos E. Gómez Centurion Sr. Mario Gastón Tobías Dr. Antonio R. Vidal Serín	Dr. Enrique Cao Sr. José Luis Casas Sr. Roberto Eguilior Ing. Agr. Horacio C. E. Giberti Dr. Gerardo P. B. Myburg Sr. Juan Severo Tártara Dr. Antonio R. Vidal Serín	Dr. Enrique G. Cao Sr. José Luis Casas Sr. Dorando J. Colombo Sr. Roberto Eguilior Ing. Agr. Horacio C. E. Giberti Dr. Gerardo P. B. Myburg
Gerente General	Sr. Walter Bernardo Stegmayer	Sr. Walter Bernardo Stegmayer	Dr. Carlos Alfredo Navone	Dr. Carlos Alfredo Navone

Fuente: elaboración propia sobre Memorias, 1968-1972.

A pesar de sus denuedos, las distintas gestiones de la “Revolución Argentina” no encontraron el modo de superar las limitaciones estructurales de la economía argentina. Un marco político extremadamente complejo, con profundas tensiones sociales y reclamos sin canalización institucional hicieron más ardua la tarea de navegar un contexto internacional cambiante y complejo. Derrotado en todos los frentes, Lanusse se vio forzado a restituir la salida democrática.

El Banco de la Nación durante el tercer gobierno peronista

Después de 18 años de proscripción, se convocó a elecciones para marzo de 1973 permitiendo la participación del peronismo, pero no la de Perón como candidato. Héctor Cámpora fue elegido presidente y contó en su gabinete con sectores del ala juvenil del movimiento, proclives a impulsar un “socialismo nacional”. Esa experiencia fue extremadamente breve y, luego de un interregno en el que asumió el presidente del Senado, Raúl Lastiri, nuevas elecciones dieron por ganadora la fórmula Perón-Perón, conformada por el viejo líder y su esposa María Estela Martínez (conocida como “Isabel”), en septiembre. En julio del siguiente año, falleció Perón y el poder quedó en manos de los grupos de derecha nucleados en torno al poderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Así, en poco menos de tres años, se sucedieron cuatro presidentes: Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez (a los que habría que sumar a Ítalo Luder, que ejerció el cargo durante un mes a fines de 1975), que no llegaron a completar el cuatrienio previsto. Esta oscilación institucional se reflejó también en la conducción económica: José Gelbard, el empresario líder de la CGE, asumió como ministro durante la presidencia de Cámpora y se mantuvo durante algunos meses luego de la muerte de Perón (con todo, su gestión duró apenas algo más un año). En los 16 meses siguientes se sucedieron cuatro ministros y cinco presidentes del BCRA en un endeble proceso político y económico.

El programa inicial de Gelbard se basó en la concertación social y utilizó los instrumentos tradicionalmente asociados a la política económica peronista: aumentos salariales, controles de precios, bajas tarifas de servicios públicos y expansión del gasto público y del crédito. Estas medidas aceleraron el crecimiento y la utilización de la capacidad instalada, aunque incrementaron las importaciones, cuyos precios treparon luego de la crisis del petróleo. El “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social” refrendado en el Congreso por la CGE y la CGT en junio de 1973 incorporaba medidas de carácter estructural, con la pretensión de impulsar el desarrollo económico y ahuyentar los fantasmas de la creciente radicalización social. Una serie de pactos sectoriales fue completada a fin de año con la presentación del “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional”, que tenía entre sus objetivos la “modificación de las estructuras productivas y distributivas, a fin de conformar un nuevo modelo de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico”. Se acentuaba el papel de las empresas de capital nacional y sobre todo del Estado como orientador y participante del proceso. Dentro de estos lineamientos, la reforma financiera adquirió un papel central.

Desde antes de la asunción de Cámpora se había debatido retornar a la centralización del sistema bancario, dejando de lado el régimen de efectivos mínimos con el argumento de que el crédito no debía asignarse por mecanismos de mercado sino por definiciones de política económica. En 1973 se aprobaron distintas disposiciones sobre entidades financieras y se sancionó la (re)nacionalización de los depósitos. En agosto, la Ley 20.520 dispuso que todas las entidades funcionarían como mandatarios del BCRA, al que le debían transferir sus fondos. El Banco Central determinaría las aplicaciones y se haría cargo de las tasas de interés pagadas a los depositantes. Las entidades debían prestar a partir de sus propios capitales y reservas, y de los recursos facilitados por el BCRA mediante la fijación de tasas de interés y límites de redescuento diferenciados. La ley estipulaba criterios generales para la provisión de fondos de acuerdo con el programa económico, las características de cada entidad financiera y su gestión crediticia (Rougier y Odisio, 2018).

La nueva Carta Orgánica del BCRA estableció que se debía canalizar el crédito en favor de la pequeña y mediana empresa y de las regiones y sectores sociales más rezagados del país, lograr un adecuado grado de liquidez y financiamiento de la economía, y afirmar el poder de decisión nacional sobre el ahorro interno. Las normas tendieron a consolidar el carácter nacional de las entidades financieras, con el propósito de evitar procesos de desnacionalización como el ocurrido durante el gobierno de Onganía. El sistema mantuvo dos líneas de redescuentos: “específicos” (sectoriales) y “generales”. Los específicos tenían tasas de interés diferenciales, por ejemplo, para financiar la construcción de viviendas, atender ciclos estacionales de la producción agropecuaria o fomentar las exportaciones “no tradicionales”. Los generales gozaban de mayor flexibilidad y el BCRA determinaba solo proporciones mínimas de fondos que debían volcarse hacia algunos sectores prioritarios. Si bien la reforma emulaba moderadamente a la de 1946, algunas disposiciones mantuvieron las condiciones del sistema derogado. Sobre todo, se procuró mantener la competencia bancaria en la captación de depósitos, con incentivos que no habían existido en la anterior experiencia peronista.

En 1973 y 1974 la economía registró un buen desempeño (Tabla 1). El consumo interno fue motor del crecimiento, aunque la inversión en equipos fue poco significativa. Entre la asunción de Perón y su fallecimiento, los precios frenaron su marcha ascendente, lo que permitió sostener el incremento del salario real mientras caía la desocupación. Por su parte, muchas empresas, al no poder trasladar los mayores costos a los precios por los controles, comenzaron a tener pérdidas o a paralizar la producción o, alternativamente, a recurrir al mercado negro. La pérdida de rentabilidad y la expectativa de inconvenientes económicos futuros debilitó la formación de capital. El balance de pagos volvió a ser superavitario, aunque con tendencia decreciente. Las dificultades para la colocación de exportaciones tradicionales y el empeoramiento de los términos del intercambio complicaron el frente externo a finales de 1974. El precio internacional del petróleo se cuadruplicó en el año, generando no solo inflación importada, sino que -ante la recesión y la inelasticidad de la demanda petrolera- los países centrales redujeron sus importaciones de bienes tradicionales. Así, precios y cantidades del comercio exterior nacional se vieron afectados negativamente. Al mismo tiempo, la economía registraba un “recalentamiento” en el frente interno, que tendió a agravar el desequilibrio fiscal y la inflación.

Sin Perón como árbitro de la disputa social, la política de concertación reveló fútiles bases de sustentación. En octubre, comenzó una etapa de reajuste, que presentó ciertas analogías con el cambio de orientación de 1949 y que fue, de hecho, conducida por Alfredo Gómez Morales. Se apuntó a contener el salario real y el consumo, y a una recomposición fiscal. A comienzos de 1975 la moneda fue devaluada, pero resultó insuficiente para reequilibrar las cuentas externas. Un ajuste más drástico se produjo en junio, durante la gestión de Celestino Rodrigo con una mega devaluación y fuerte suba de tarifas y combustibles (medidas conocidas popularmente como el “rodrigazo”), aunque la inmediata respuesta de precios y salarios impidieron la estabilización de los precios relativos. Tras un breve paso de Pedro Bonanni por el Ministerio de Economía, fue sucedido por Antonio Cafiero. Su política de minidevaluaciones contuvo parcialmente la apreciación del tipo de cambio, aunque la incapacidad de aumentar los ingresos públicos al ritmo de la inflación exacerbó el desequilibrio fiscal. También el ajuste de las cuentas externas se dificultó y la amenaza de la cesación de pagos promovió la aplicación de nuevas medidas recesivas por parte de Emilio Mondelli a principios de 1976.

En definitiva, la lógica económica entre 1973 y 1976 -que evidentemente seguía determinada por el característico ciclo de stop and go- presentó dos momentos diferenciados: una fase expansiva, que se extendió poco más de un año (gestión Gelbard), y otra de restricción, que se dilató el siguiente año y medio bajo distintos planes de ajuste, igualmente malogrados (Rougier y Fiszbein, 2006).

El Banco debió adecuarse una vez más a los cambios normativos y políticos. Más allá de varias modificaciones en el Directorio (y en la titularidad de la Presidencia, que pasó de Juan Carlos Paz a Roberto Ares), la mayoría de los directores se desempeñaron al menos por dos años, mientras que Rodolfo Ahuad y Ángel Valentinuzzi lograron incluso mantener permanencia durante los tres años considerados. No debe olvidarse tampoco la mencionada estabilidad en el cargo de Gerente General (Tabla 7). Por otra parte, en agosto de 1973 la Ley 20.521 incorporó directorios regionales a la estructura orgánica del BNA (y a la del BIRA, renombrado en 1971 como Banco Nacional de Desarrollo, BANADE), a fin de fomentar la descentralización regional.

Tabla 7: Directorio del BNA entre 1973 y 1975

	1973	1974	1975
Presidente	Sr. Juan Carlos Paz	Dr. Roberto A. Ares	Dr. Roberto A. Ares
Vicepresidente	Dr. Orlando Leonardo Santos	C.P.N. Armando Blasco	Cap. de Fragata (RE)
Vicepresidente 2°	Sr. Juan Severo Tártara	Dr. Edgardo María Hilaire Chagnetón	Sr. Raúl Pedro Etchevers
Directores	Sr. Rodolfo Hector Ahuad C.P.N. Armando Blasco Dr. Edgardo María Hilaire Chagnetón Sr. Luis Eduardo Mendé Dr. Gerardo P. B. Myburg Ing. Agr. Julio José Torchia Sr. Ángel Oscar Valentinuzzi	Sr. Rodolfo Hector Ahuad C.P.N. Juan Carlos Baslini Cap. de Fragata (RE) Sr. Raúl Pedro Etchevers Sr. Alfonso Millán Sr. Ángel Oscar Valentinuzzi	Sr. Rodolfo Hector Ahuad C.P.N. Juan Carlos Baslini Sr. Alfonso Millán Sr. Ángel Oscar Valentinuzzi
Gerente General	Dr. Carlos Alfredo Navone	Dr. Carlos Alfredo Navone	Dr. Carlos Alfredo Navone

Fuente: elaboración propia sobre Memorias, 1973-1975.

Al mismo tiempo, y a requerimiento del Ministerio de Economía, se presentó un proyecto de reforma de la Carta Orgánica, aprobada por el Congreso de la Nación en octubre de 1974. El reordenamiento debía permitir al Banco mantener un papel relevante “en esta etapa decisiva de reconstrucción nacional”, acentuando que la modificación “será de suma utilidad para encarar con medios más idóneos la promoción y diversificación del comercio exterior, que tan decisiva importancia tiene para el desenvolvimiento económico del país” (Memoria 1973: 3). Con ese objetivo, se puso en funciones un Departamento de Promoción de Negocios con el Exterior, que brindaba asesoramiento a medianos y pequeños empresarios del interior. Desde hacía algunos años funcionaban en algunas filiales de ciudades importantes con aduanas, secciones específicas dedicados al financiamiento del comercio exterior, que operaban independientemente de la Casa Central. A los ocho heredados (Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Neuquén, San Juan y San Miguel de Tucumán) la nueva gestión puso en funcionamiento oficinas en Salta y Posadas en 1973, en Clorinda y Santa Fe al año siguiente y en San Rafael, Corrientes y Paso de los Libres en 1975. Asimismo, aprovechando los regímenes especiales del BCRA se intensificó otra estrategia aplicada previamente: la concesión de crédito a bancos oficiales de países limítrofes para que financiaran compras de manufacturas argentinas; los más importantes fueron acordados a Chile, Paraguay y Bolivia.

En 1973 el Banco inauguró 36 sucursales en el país, la mayor ampliación en su historia. Con similar impulso, se desplegaron unidades móviles (llamadas “minibancos”) para percibir pagos de impuestos y de servicios públicos, aportes jubilatorios y de previsión social. Se planificó habilitar 40 de estas pequeñas oficinas en lugares con gran afluencia de público. También continuó la política de expansión hacia el extranjero. En el año se inauguraron oficinas de representación en Madrid, Santiago de Chile, México DF, Roma, París, Londres y Bogotá. Al año siguiente se inauguraron dos más en Caracas y Coronel Bogado (Paraguay). En 1975, quedaron habilitadas una oficina en Milán, una agencia en Tarija (Bolivia) y en Paraguay, una filial en Presidente Stroessner y una oficina en Concepción.

El objetivo era iniciar oficinas europeas como paso previo para su transformación en agencias, como sucedió con la representación instalada en 1972 en Nueva York. Al recibir habilitación como agencia el 2 de octubre de 1973, se transformó en la primera filial operativa que un banco argentino abrió en esa ciudad. Aunque no realizaran operaciones bancarias estrictamente, las representaciones de Madrid, Roma, París y Londres realizaban gestiones para atraer negocios e inversiones extranjeras al país y fomentaban exportaciones hacia esos destinos. Debían cumplir ese mandato “coordinando su acción con la de las Agregadurías Comerciales; detectando importantes ofrecimientos de líneas de crédito; proporcionando a sectores interesados información sobre legislación y actividad bancaria en nuestro país; intercambiando ofrecimientos de becas para estudios sobre temas económicos; facilitando el desempeño de misiones de autoridades y empresarios argentinos” (Memoria 1974: 50). Este ímpetu del Banco permitió abrir nuevos mercados para productos industriales “como implementos electrónicos, máquinas calculadoras, automóviles, locomotoras, aviones, máquinas agrícolas, productos químicos, artículos de cuero, prendas de vestir, vinos, quesos, manteca, miel y muchos otros” (Memoria 1975: 10).

En función de su trayectoria, técnicos del BNA tuvieron destacada participación en el armado y difusión de los planes de desarrollo agropecuario del nuevo gobierno en 1973. Sobre líneas de acción heredadas, el Banco sumó nuevos programas de desarrollo regional (los más importantes en Salta y Jujuy, Tucumán, Chubut). La política económica impulsó el despliegue de nuevas líneas de préstamos y se brindó crédito adicional para las empresas industriales (en 1973 los saldos se incrementaron 80%), especialmente para las ramas de alimentos e indumentaria; para afrontar incrementos salariales; para impulsar la inversión en bienes de origen nacional y mejorar la productividad de pequeñas y medianas empresas. Los mayores aumentos en los créditos se concedieron a ingenios azucareros y a hilanderías y tejedurías de lana, por los altos precios que los industriales debieron afrontar por su materia prima. También tuvieron subas notorias los préstamos destinados a fabricantes de bebidas y otras industrias textiles demandados, respectivamente, por la actividad vitivinícola y del algodón ante la fuerte expansión de su demanda.

Si bien los fondos destinados a la construcción tuvieron una expansión moderada (y, de hecho, menor a la de los precios) se los orientó hacia la realización de obras hidráulicas, energéticas y viales, en línea con el impulso a la obra pública del gobierno. Además, surgió como destino importante la edificación de viviendas bajo el objetivo trazado por el Ministerio de Bienestar Social para “erradicar” las llamadas “villas de emergencia”. Desde el BNA se especificaba que los préstamos personales “revisten un gran sentido social y popular”, y tuvieron significativa expansión, aunque “por falta de fondos no ha sido posible atender la totalidad de la demanda potencial” (Memoria 1973: 34).

Más allá de necesidades coyunturales, el accionar del BNA continuó promoviendo a las economías regionales y la integración agroindustrial. Cuando era posible, brindó asistencia técnica con la colaboración del INTA y de organismos provinciales homólogos. Las tasas siguieron estando fuertemente subsidiadas, ubicándose por debajo de la inflación. En 1974, el Directorio identificó las pautas de acción fijadas por la nueva Carta Orgánica de la siguiente manera:

plasmar una acción crediticia en apoyo preferentemente de las pequeñas y medianas unidades de producción de capital nacional; coadyuvar a una más alta eficiencia mediante la tecnificación del proceso productivo primario; propiciar un fluido proceso de comercialización de la producción agraria mediante su adecuado ordenamiento, como así también del comercio en general y los demás servicios; promover las actividades productivas directamente vinculadas con los bienes de consumo masivo o con perspectivas favorables en los mercados internacionales o bien aquellos que podrían ser sustitutivos de insumos, bie-

nes complementarios o finales importados; facilitar el desenvolvimiento de los programas de exportación, especialmente los vinculados con bienes o servicios promocionados; y atender las necesidades de índole económico-social de la población extendiéndola a los sectores de menor desarrollo (Memoria 1974: 2).

La experiencia del “Sistema del Banco Central” fue aprendida y no se produjo otra “sobreexpansión” de la cartera del BNA; por el contrario, si en 1973 por cada 100 pesos captados se prestaron 97, la relación cayó a 83 en 1975. Bajo el nuevo sistema nacionalizado, la institución veía limitados los recursos que el BCRA habilitaba para que otorgara préstamos, a pesar de que cubrían “necesidades legítimas del proceso económico”.¹⁴ Al alza y a la baja, las cuentas del BNA amortiguaban el impacto de los vaivenes financieros.

De hecho, las limitaciones obligaron a las autoridades del Banco a endurecer los criterios de préstamo. Las principales implicancias fueron el desplazamiento de fondos desde las zonas más ricas hacia las de menor desarrollo relativo, la expansión de los recursos directa o indirectamente asignados al sector agropecuario, el otorgamiento de créditos para producciones regionales con dificultades productivas, económicas o climáticas y para aquellos casos en que la comercialización de cosechas tenía dificultades. La decisión también impactó en el plazo de los créditos, creciendo el porcentaje destinado a los de corta maduración, que de por sí eran los más importantes. La cartera comercial creció notablemente en 1974 y la mayor expansión provino de las categorías destinadas a productos agropecuarios (362%) y a ramos generales de campaña (126%). Esa asistencia se canalizó por la Junta Nacional de Granos, que recibió el 10% de los acuerdos otorgados por el Banco ese año mientras que la notable expansión (del 95%) en los créditos otorgados en Casa Central quedó explicada porque las oficinas de esa dependencia estaban ubicadas en la Capital Federal. Tomando en consideración los créditos en favor del agro consignados a otras actividades, el 76% de los acuerdos totales y el 67% de los saldos tuvieron como destino al sector.

El fomento agropecuario recibió particular impulso en 1975. Se renovó el “programa piloto” de 1971 con un nuevo aporte de 30 millones de dólares del BID y el compromiso de una suma equivalente del BNA. También el programa de desarrollo forestal recibió del Banco Interamericano 30 millones de dólares, que se sumaron a las fuentes de aportes habituales (del Fondo Forestal Nacional y del BCRA). Se lanzó una segunda etapa para sumar otros 7 millones de hectáreas de electrificación rural. El BID proporcionó 43 millones de dólares y como contraparte nacional se cubrirían 39 millones adicionales. La línea de financiamiento para la construcción de instalaciones para el almacenamiento de granos fue también renovada y se iniciaron gestiones para que el BIRF brindara un nuevo aporte.

La expansión del plantel laboral siguió un curso ascendente desde 1970 (Gráfico 7). Durante los siguientes cinco años, el total de trabajadores y trabajadoras del Banco pasó de 17 a 25,5 mil. Los beneficios sociales para el personal se ampliaron: servicios de salud, programas de vivienda, líneas especiales de crédito, servicio de comedor, entre otros. También continuó su marcha el programa de capacitación con la creación en 1973 se creó del Instituto de Capacitación para el Personal. Al año siguiente se renovó el convenio con la ALIDE para brindar 10 becas por año para que empleados del Banco tomaran los cursos sobre técnica y operativa del crédito agrario y cooperativo, auditoría interna, externa y contabilidad; a los que se agregó otro sobre comercio internacional.

¹⁴ Fuentes minoritarias de fondos del Banco provenían del capital y reservas no invertidas en activo fijo, utilidades generadas a lo largo del ejercicio y préstamos externos. También podía manejar los recursos generados en el mercado de aceptaciones, pero las habilitaciones concedidas se mantenían aparte y no entraban en la cartera general.

También se realizó una importante inversión para modernizar los equipos de cómputo de la Casa Central en 1974. En estos años se implementó el sistema de “Teleproceso” por medio del cual los titulares de cuentas del Banco podían realizar operaciones (depósitos y extracciones) en cualquiera de las sucursales incorporadas a la red. Para 1975 se hallaban conectadas la Casa Central con siete agencias de la Capital Federal (Abasto, Azcuénaga, Caballito, Congreso, Balvanera, Plaza Miserere y Palermo) y tres grandes sucursales del interior: Mar del Plata, Córdoba y Rosario.

En octubre de 1976 el Banco cumplió 85 años. El Directorio remarcaba que la celebración se había producido en “pleno proceso de renovación y transformación” (Memoria 1976: 7). De esa manera se aludía al cambio de orientación tras el golpe del 24 de marzo. Los meses previos se habían caracterizado por una agudización del proceso inflacionario, el empeoramiento del balance de pagos y una consecuente huida hacia el dólar, de la mano de una creciente pérdida del control político por parte del gobierno peronista. Los nuevos directores señalaban que el BNA no había quedado inmune a los problemas de los años previos. Adoptando el mismo discurso que los militares en el poder, se defendía el accionar de las fuerzas armadas ante “un estado tal que el mayor aliciente se encontraba en la especulación y no en el esfuerzo productivo y constante de creación de bienes y riquezas. Esta situación anormal no era única ya que se encontraba enraizada en un proceso de profunda crisis moral” (Memoria 1976: 6). Como muestra el siguiente capítulo, los cambios impulsados serían ciertamente profundos tanto para la economía nacional como para el Banco, pero no precisamente en el sentido de la “economía de producción” propugnada inicialmente por el ministro Martínez de Hoz.

Reflexiones finales

El extenso período aquí analizado quedó enmarcado por dos golpes de Estado realizados contra gobiernos peronistas democráticamente elegidos; esto es, de septiembre de 1955 a marzo de 1976. En ese lapso, se sucedieron regímenes de diversa orientación: militares, conservadores, liberales, distribucionistas, desarrollistas y radicales de distinto tipo tuvieron en sus manos el manejo del Poder Ejecutivo Nacional bajo un sistema político languideciente. Como analizaron en su momento Guillermo O’Donnell, Mónica Peralta Ramos, Marcelo Diamand, Aldo Ferrer y otros sobre la senda abierta por el estudio original de Juan Carlos Portantiero (1973), la Argentina estaba entrampada por una lógica pendular. Este sociólogo fue el primero en señalar que el país, tras el agotamiento de la sustitución de importaciones de las industrias livianas a principios de la década de 1950, enfrentaba una situación de “crisis orgánica” ya que no había correspondencia entre el plano de la estructura económica y la dinámica política, lo que daba pie a una situación de “empate hegemónico”, en la que ni el capital monopolista ni el proletariado industrial lograban imponer su programa o intereses.

Durante 18 años se mantuvo la proscripción formal del peronismo en el sistema político. Sin embargo, cuando se produjo la apertura democrática en 1973, la figura de Perón apenas logró contener las pugnas, develando su profundidad. El conflicto social impidió que el modelo de industrialización se desarrollara de manera más estable. Sus contradicciones impusieron férreos límites que, en el plano económico, se manifestaron en la persistente inflación, un crecimiento menor al considerado conveniente, fuertes pujas distributivas, una obstinada demanda de divisas y enérgicas exigencias al Estado que afectaron las cuentas públicas. Con todo, la política económica seguida entre 1955 y 1976, con opciones diversas y resultados desiguales, se orientó a lograr el desarrollo con una estrategia basada en la sustitución de importaciones, la equidad distributiva y la inclusión social. Más allá de los problemas y la preeminencia de las medidas de corto plazo por sobre las definiciones estratégicas, el desempeño económico fue positivo. Hacia 1975 la sociedad argentina era mucho más rica que

en lustros anteriores y gozaba, independientemente de sus avatares políticos, la inestabilidad económica y una fuerte conflictividad social, de una importante inclusión y bienestar que la distinguía entre las naciones latinoamericanas (Odisio y Rougier, 2021).

El Banco Nación quedó sumergido en esa dinámica turbulenta y mostró una evolución marcada por continuidades y rupturas respecto a su operación en décadas anteriores. El marco general estuvo dado por una política monetaria restrictiva por parte del BCRA, dadas las persistentes presiones inflacionarias de la época (incluso sin considerar la sideral aceleración producto del “rodrigazo”, el promedio anual de crecimiento de los precios entre 1955 y 1974 fue del 31,6%). Una de las respuestas impuestas por ese problema fue el fin del financiamiento público por parte del BNA. Después del reajuste derivado de la reforma financiera de 1957 y el subsiguiente saneamiento patrimonial, la magnitud de la cartera del Banco absorbida por instituciones oficiales se redujo fuertemente. Este destino no volvería a tener importancia en el período analizado, con la salvedad de los recursos canalizados hacia la Junta Nacional de Granos durante el tercer gobierno peronista.

En términos sectoriales, la orientación se mantuvo enfocada en las necesidades del sector agropecuario, de corto y de largo plazo. Para ello el Banco desplegó líneas generales de crédito que se sostuvieron a pesar de los cambios en la política económica o de las autoridades que pasaban al frente de la institución. Condiciones especiales (prórrogas, facilidades de pago, reducción de tasas interés, créditos adicionales) se fijaban al presentarse contingencias climáticas adversas, dificultades productivas o de absorción para algún producto agrícola, pecuario o forestal del país, a fin de sostener a las explotaciones en funcionamiento o favorecer su rehabilitación. Además, se mantuvieron algunos esquemas de financiamiento que venían del periodo previo, como los destinados a la construcción de vivienda rural, hipotecarios, o los dispuestos para cooperativas. A mediados de los sesenta, derivados de los objetivos del “Plan de Desarrollo 1965-1969”, destacaron los programas específicos de electrificación rural, para la construcción de silos y elevadores y para la implantación de pasturas. Durante el gobierno siguiente, resaltaron el “Proyecto Balcarce de Desarrollo Ganadero” y el “Programa de Crédito Agrícola Orientado”. Asimismo, en los trabajos preparativos del “Plan Trienal” de 1973 el Banco participó en la elaboración de los programas promocionales agropecuarios.

En esta labor, el BNA articuló su política con otras instituciones financieras o técnicas del país y del exterior, como el BID o la AID. También solicitó la participación y el asesoramiento del INTA. No solo procuró enfatizar el avance tecnológico de las explotaciones rurales, sino que también colaboró con las políticas de desarrollo regional, otro de los imperativos de la época. La lógica de fomento espacial se hizo más importante en los programas de préstamo, y para la década del setenta se habían multiplicado los planes orientados a regiones o provincias del interior del país. Si bien el acento en las actividades tradicionales no implicó el descuido del auxilio financiero de otros sectores, se buscaba atender especialmente las necesidades financieras de las empresas industriales, comerciales o de servicios vinculadas (por oferta o por demanda) con las producciones primarias. Por lo menos dos cambios de importancia se verificaron en relación con el papel jugado por el Banco del peronismo “clásico”. Por un lado, el abandono de las tareas de colonización, que desde 1958 pasaron a ser atendidas por el Consejo Agrario Nacional. Por otro, desde 1959 el fomento de las exportaciones “no tradicionales” y, en general, el apoyo de las ventas externas del país. No solo se expandieron las filiales del Banco en el extranjero, sino que -en función de las disponibilidades dadas por liberaciones condicionadas de encaje que el BCRA establecía a tal fin- se brindó importante financiamiento a los exportadores, tanto primarios como industriales. A partir de 1970 se manifestó una preocupación creciente en el otorgamiento de líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas de origen nacional, como para financiar el consumo.

En suma, el BNA se mantuvo como la principal institución del sistema bancario argentino, si bien con una

participación declinante a lo largo del tiempo. Si a mediados de los cincuenta manejaba cerca del 40% de los recursos (préstamos y depósitos), dos décadas más tarde esos volúmenes se ubicaban en torno al 20%. Con todo, el Banco de la Nación no dejó de jugar un papel central como instrumento de política económica en el período de auge de la “industrialización dirigida por el Estado”.

Referencias bibliográficas

- Banco Central de la República Argentina (años citados). Memoria Anual. Buenos Aires. Obtenido de https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Memoria_anual.asp
- Banco de la Nación Argentina (1955 a 1976). Memoria y Balance General. Buenos Aires. Obtenido de <https://www.bna.com.ar/Institucional/MemoriaYBalances/MemoriaYBalancesHistoricos>
- Banco de la Nación Argentina. (1970). El Banco de la Nación Argentina en su 75° Aniversario, 1891-1966. Buenos Aires: BNA.
- Bavio, B. (1967). Dinámica bancaria argentina. Buenos Aires: Tesis de Doctorado en Ciencias Económicas, FCE-UBA.
- Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2013). El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia. Ciudad de México: FCE.
- Bueno, H. E. (1960). Análisis del reordenamiento bancario argentino del año 1957. Buenos Aires: Tesis de Doctorado en Ciencias Económicas, FCE-UBA.
- Coviello, R., & Rougier, M. (2022). La apuesta desarrollista y la planificación industrial (1953-1976). En M. Rougier (coord.), Escenarios del desarrollo industrial bonaerense (1820-2020) (págs. 182-245). La Plata: Ediciones Bonaerenses.
- Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. *Desarrollo Económico*, 12(45), 25-47.
- Difrieri, J. A. (1967). Moneda y bancos de la República Argentina. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Dosman, E. (2008). *The Life and Times of Raúl Prebisch, 1901-1986*. Montreal y Londres: McGill-Queen's University Press.
- Feldman, E. V. (1983). La banca nacional y extranjera en Argentina 1958-1970: un análisis comparativo de su comportamiento y desempeño en un contexto de inflación y restricciones administrativas. México: CEMLA.
- Ferrer, A. (1975). La crisis del sistema monetario internacional: un enfoque estructuralista. *Estudios Internacionales*, 8(30), 48-99.
- Ferreres (dir.), O. (2020). Dos siglos de economía argentina, 1810-1910-2010: historia argentina en cifras. Buenos Aires: Fundación Norte y Sur. Obtenido de <https://dossiglos.fundacionnorteysur.org.ar/series>
- Fiszbein, M. (2015). La economía del stop and go: las ideas estructuralistas en Argentina, 1945-1976. *Desarrollo Económico*, 55 (216), 187-210.
- Fiszbein, M., Odisio, J., & Rougier, M. (2022). La política económica en la encrucijada: El giro nacionalista y sus desafíos, 1970-1973. En D. Heymann, A. Jáuregui, & P. Gerchunoff (coords.), *Medio siglo entre tormentas. Fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002)* (págs. 227-260). Buenos Aires: Eudeba.

- Girbal-Blacha, N. (2001). El Banco de la Nación Argentina: administrador y empresario agroindustrial. El caso del ingenio y refinería Santa Ana, Tucumán (1932-1958). Buenos Aires: FCE-UBA-IIHES-PIEA.
- Noya, A. (1970). El sistema financiero argentino. Buenos Aires: Selcon.
- Odisio, J. (2022). Raúl Prebisch (1901-1986). En J. Odisio, & M. Rougier (coords.), El desafío del desarrollo. Trayectorias de los grandes economistas latinoamericanos del siglo XX (págs. 29-71). Bogotá y Santander: Universidad del Rosario-Universidad de Cantabria.
- Odisio, J., & Rougier, M. (2018). En el auge de la industrialización sustitutiva. En M. Rougier, & F. Sember (coords.), Historia necesaria del Banco Central de la República Argentina (págs. 251-314). Buenos Aires: CIC-CUS-Lenguaje claro.
- Odisio, J., & Rougier, M. (2019). La estrategia exportadora de la industrialización por sustitución de importaciones: debates y resultados entre 1955 y 1975. Papeles de Trabajo, 13(23), 137-159. Obtenido de <http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/papdetrab/issue/view/52/51>
- Odisio, J., & Rougier, M. (2021). La industrialización dirigida por el Estado (1955-1973). En M. Rougier (coord.), La industria argentina en su tercer siglo. Una historia multidisciplinar (1810-2020) (págs. 197-262). Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
- Odisio, J., & Rougier, M. (2021). National Cases of Industrialization: Argentina. En M. Vernengo, B. Rosser, & E. Pérez Caldentey (eds.), New Palgrave Dictionary of Economics. Londres: Palgrave Macmillan.
- Piola, C. R. (1967). El Banco de la Nación Argentina y la lucha por el desarrollo económico, 1960-1962. Buenos Aires: Editorial Desarrollo.
- Portantiero, J. C. (1973). Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual. En O. Braun (comp.), El capitalismo argentino en crisis (págs. 73-117). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Prebisch, R. (1956). Informe preliminar acerca de la situación económica. Buenos Aires: Memoria Anual BCRA 1955 - Apéndice.
- Rougier, M. (2022). El enigma del desarrollo argentino. Biografía de Aldo Ferrer. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rougier, M., & Fiszbein, M. (2006). La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista de 1973-1976. Buenos Aires: Manantial.
- Rougier, M., & Odisio, J. (2012). Del dicho al hecho. El 'modelo integrado y abierto' de Aldo Ferrer y la política económica en la Argentina de la segunda posguerra. América Latina en la Historia Económica, 19(1), 99-130. Obtenido de <http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/494>
- Rougier, M., & Odisio, J. (2017). "Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos". Las ideas sobre el desarrollo nacional (1914-1980). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Schvarzer, J. (1996). La industria que supimos conseguir. Una historia político social de la industria argentina. Buenos Aires: Editorial Planeta.